

## **¿QUÉ HA SIDO DE TODOS LOS MOVIMIENTOS?**

### LOS MOVIMIENTOS SOCIALES LATINOAMERICANOS EN VISPERAS DEL NUEVO MILENIO

Autora: Susan Eckstein

Los movimientos sociales latinoamericanos que se han descrito en este volumen, nacidos tanto de la esperanza en un futuro mejor como de la desesperación por las condiciones pasadas y actuales, siguieron diferentes derroteros al finalizar el siglo. Algunos alcanzaron una parte de sus metas, si no todas, y otros tuvieron más influencia de lo que jamás soñó la mayoría de los que participaron en ellos. Pero hubo movimientos menos afortunados, movimientos que no pudieron lograr el cambio y cuyos miembros perdieron la vida o fueron encarcelados. ¿A qué se debe sus destinos diferentes? Este epílogo ofrece una oportunidad singular para reflexionar en los efectos a largo plazo de los movimientos sociales y para comparar los movimientos más viejos con los más recientes que surgieron pisándoles los talones. Permite, también, un análisis de los efectos de las condiciones macroeconómicas, políticas y sociales distintas, en el decenio de 1990, en las movilizaciones a favor de un cambio. En particular, este epílogo pone de manifiesto el impacto de una profundización de las reformas neoliberales respaldadas por Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional y de la democratización fincada tanto en la desaparición de la guerra fría como en la oposición interna al gobierno militar. Y, de igual manera, subraya los efectos de un nuevo papel asumido por las organizaciones no gubernamentales (ong), y los cambios en los criterios culturales respecto del universalismo, los derechos del ciudadano y las identidades.

El cambio de las condiciones macroeconómicas resulta de las tendencias globales que afectan a todas las regiones del tercer mundo, tendencias fincadas en una reestructuración de la producción, el consumo y la acumulación de capital en una escala mundial. Sin embargo, las condiciones peculiares de América Latina contribuyeron a la rapidez y la dimensión de los cambios que hubo allí. El neoliberalismo, basado en la premisa de la prioridad de la actividad del mercado sin trabas, fue asociado con la privatización de la actividad económica, la eliminación de los subsidios y los controles de precios del estado, la liberalización de los precios y la reducción tanto de las barreras al comercio como de las restricciones a la inversión extranjera. Los economistas, respaldados por Washington y por la comunidad bancaria internacional, contribuyeron a legitimar el neoliberalismo. Sostuvieron que el nuevo modelo económico fomentaba al máximo la eficiencia, el crecimiento, el comercio y el pago de la deuda externa.

Las crisis de la deuda del decenio de 1980 en América Latina establecieron el escenario para la transformación neoliberal. Las crisis desacreditaron la sustitución de importaciones como modelo de desarrollo y debilitaron la posición negociadora de los gobiernos en la región frente a los bancos extranjeros. Hasta la fecha, el nuevo esquema económico ha beneficiado a aquellos sectores y empresas nacionales más capaces de competir en una economía de libre comercio

globalizada. Sin embargo, ha beneficiado sobre todo a las empresas extranjeras en gran escala, ya que la reestructuración aumentó su acceso a los mercados locales mediante la eliminación de las barreras comerciales y de las restricciones a la inversión extranjera. No obstante, los gobiernos abrumados por la deuda vieron la reestructuración como un medio de generar monedas fuertes para el pago de la misma y de las importaciones y, en segundo lugar; para generar empleos. Pero lo que puede ser bueno para los bancos, los inversionistas y los gobiernos ha demostrado no serlo para muchos en las clases baja y trabajadora e incluso en la clase media, por lo menos a corto plazo. Por esta razón, la profundización del proceso de reforma neoliberal ha continuado suscitando resistencia.

De manera algo independiente pero seguida, la democratización tomó a la región por asalto. Una vez que ésta se volvió segura tanto para la democracia como para las empresas, Washington les retiró su apoyo a las dictaduras militares que había respaldado desde el decenio de 1960 hasta el de 1980. Pero la democratización también encontró amplio apoyo nacional en la región. En realidad, los movimientos del decenio de 1980, varios de los cuales han sido analizados en este libro, contribuyeron a dar paso a las transformaciones políticas.

El gobierno civil y las elecciones competitivas se han convertido de manera uniforme en pilares de las nuevas democracias. Los alcances de la democratización, sin embargo, han dependido de la gama de derechos que los ciudadanos han venido a disfrutar, no sólo del cambio institucional formal. La profundización de la democracia ha sido discutible y desigual.

La política global y la homogeneización estructural económica han tenido, a su vez, sus apuntalamientos. Los valores y las normas sancionados "desde arriba" y desde afuera, es decir, respaldados por las élites dominantes, el gobierno extranjero y las potencias multilaterales, han legitimado los cambios. El discurso oficial ensalza las virtudes del orden, la economía del mercado sin obstáculos, los derechos políticos y la modernidad. Sin embargo, las respuestas latinoamericanas a los cambios han sido filtradas por las creencias, las costumbres y los usos locales, y moldeadas por las posiciones de la gente en las jerarquías institucionales y las participaciones sociales. Los cambios económicos y políticos han producido nuevas carencias, expectativas e identidades pero, también movimientos de oposición a los efectos de las reformas que no agradan. Las respuestas locales han contenido y modificado la homogeneización global económica, política y cultural y han ejercido presión en pro del respeto de las particularidades locales. Las tendencias contrahegemónicas, aunque a menudo ocultas, se han manifestado cuando las condiciones han sido propicias y cuando las expectativas vividas por la gente se han considerado especialmente atroces e intolerables.

Así como las opiniones de la gente sobre las reformas han variado con sus experiencias vividas y sus valores, también han variado los análisis de los sociólogos sobre lo que acontecía, lo cual era filtrado por los lentes conceptuales a través de los cuales veían a la sociedad. Lo que los sociólogos ven, subrayan y ponen en primer lugar depende de sus suposiciones a priori y de sus marcos analíticos. En un extremo están los economistas neoliberales y otros que dan prioridad a la dinámica de la modernización global, que señalan tendencias

homogeneizadoras transnacionales, y los responsables de las políticas y los analistas políticos que señalan una correlación y una afinidad natural entre la democratización y las reformas del mercado. Los sociólogos consideran que la homogeneización es buena y que las instituciones políticas son la base para la canalización de las preocupaciones. Su marco de análisis no los orienta a los movimientos sociales, que verían como trabas que obstaculizan la actividad plena de las fuerzas del mercado y las prácticas institucionales democráticas. Los posmodernistas, en el otro extremo, se centran en la resistencia y en la variabilidad locales, que atribuyen a las distintas creencias y normas. Desde su punto de vista, los pueblos del tercer mundo no aceptan automáticamente las opiniones y las prácticas impuestas "desde arriba" y desde fuera, y no hay una vía unilineal de desarrollo. En lugar de estructuras, procesos y valores universales globales, los posmodernistas subrayan lo que llaman particularidades "descentradas", basadas no sólo, o principalmente, en las relaciones institucionales, sino en las percepciones y creencias individuales y de grupo. Paradójicamente, las dos perspectivas extremas ganaron aceptación en el decenio de 1990.

Mientras tanto, los marxistas y neomarxistas siguen atribuyendo prioridad a la dinámica de clases en los planos nacional e internacional, y ven el cambio social como impulsado, en primer lugar y sobre todo, por los intereses de clase. En la medida en que se centran en la resistencia al cambio, destacan los movimientos sociales de base económica por encima de aquellos que se fundan en las relaciones de producción. A su vez, los analistas que se centran en el estado, subrayan la manera en la que éste, institucional e ideológicamente, media entre las tendencias a la globalización, por una parte, y la sociedad civil, por otra. Por consiguiente, los movimientos sociales no son vistos tan sólo como respuestas a las tendencias basadas globalmente, la dinámica de clase o las creencias, costumbres y normas locales "descentradas", como subrayan los analistas de la modernización/neoliberal, marxistas y posmodernos, sino como respuestas a las prácticas institucionales estatales y a las ideologías propagadas por el estado.

En esencia, las diferentes perspectivas enfocan características distintivas de un mundo que, en lo concreto, es complejo. Cada marco de análisis prefiere cierta información y deja otra sin señalar, documentar o analizar. Mientras que un marco de análisis específico puede revelar más y con más precisión lo que en realidad resume, precisamente porque los marcos diferentes privilegian información diferente, cada uno es más esclarecedor en ciertos contextos que otros.

Las formas y condiciones en que las características identificadas con las diferentes perspectivas subrayan y explican los movimientos sociales del decenio de 1990 serán consideradas más adelante, utilizando el tipo de enfoque institucional con base histórica que los autores de este volumen utilizaron también con tanto acierto. Esta clase de enfoque estructurado se centra en la interacción entre las dinámicas macro e institucional local, de grupo y cultura. La actividad con base institucional ofrece una ventaja a través de la cual podemos descubrir la relación entre estructura y organismo, estructura y cultura. Mostraremos que las condiciones y las prácticas culturales históricamente establecidas siguen moldeando, más no predeterminan cuándo y cómo los latinoamericanos se han resistido colectivamente al orden establecido y han ejercido presión en pro de un cambio. Por consiguiente, el enfoque apegado al contexto ofrece una base para delinear cómo y explicar por qué las respuestas locales a los macrocambios pueden

varias al mismo tiempo que puede haber elementos comunes entre respuestas localizadas. En primer lugar, se resumen las formas de protesta y resistencia en el decenio de 1990; luego, se analizan los movimientos en función de sus bases sociales.

## LAS FORMAS VARIADAS DE PROTESTA

En el mapa político latinoamericano, las rebeliones y revoluciones en gran escala fueron menos al final del decenio de 1990 que desde el decenio de 1960 hasta mediados del decenio de 1980. El fin de la guerra fría menoscabó el atractivo del marxismo por razones pragmáticas, si no ideológicas. La Unión Soviética y su aliado regional, Cuba, ya no podían ser fuentes de ayuda económica. Y una oleada de redemocratización llevó al poder a gobiernos más flexibles y descentralizados que socavaron la base política principal, si no la base social y económica, para la revolución.

Sin embargo, el cambio en las condiciones macropolíticas no eliminó los viejos movimientos de guerrilla ni impidió que surgieran otros nuevos. Pero el cambio, como se detalla más adelante, impidió que los movimientos guerrilleros, excepto en Colombia, expandieran su base de apoyo, prerequisite (considerado por Wickham-Crowley en su ensayo) para una toma revolucionaria del poder.

El regreso de los militares a los cuarteles desactivó los movimientos por los derechos humanos en gran escala y los movimientos guerrilleros. Los movimientos pluriclasistas en Chile, Brasil y Argentina, descritos por Garretón, Alves y Navarro respectivamente, murieron calladamente, para todas las intenciones y los propósitos, con las transiciones al gobierno civil en los tres países.

Al mismo tiempo, el repertorio de los movimientos sociales se amplió. América Latina se convirtió más aún en un "museo vivo" de actividad de movilización en el decenio de 1990 que en los decenios anteriores. Algunos de los movimientos más viejos continuaron, aunque a menudo en una forma modificada, mientras que surgieron movimientos nuevos, nacidos de nuevas preocupaciones.

La permanencia de residuos de movimientos de derechos humanos contra los regímenes militares reflejó la persistencia de los movimientos basados en condiciones del pasado. Nuevas autoridades civiles, con un poder precario, concedieron inmunidad a los funcionarios de los regímenes represivos que remplazaron. Estas nuevas autoridades civiles pusieron su propia preocupación por el ejercicio del poder por encima de la justicia. Contra ese telón de fondo, un grupo de activistas continuaron ejerciendo presión para que los militares rindieran cuentas de sus crímenes anteriores contra la humanidad. Esto fue especialmente cierto en Argentina, en donde fueron asesinadas y "desaparecidas" más personas, en donde la oposición a los militares se había basado en un movimiento cohesivo sobre un solo tema y donde los militares dejaron el poder desacreditados tanto militar (después del fracaso de la guerra de las Malvinas) como económica y moralmente.

Mientras tanto, un decenio después del regreso al gobierno civil, los recuerdos de las atrocidades de Pinochet impulsaron algunas manifestaciones de apoyo a los esfuerzos de un juez español por extraditar y juzgar al viejo ex dictador de 82 años. Los españoles emitieron una orden de arresto cuando Pinochet estaba hospitalizado en Londres. La manera en la que Pinochet orquestó la transición democrática chilena, descrita más adelante con más detalle, impidió a los chilenos presentar acusaciones propias. La prohibición había obligado a los chilenos, hasta entonces, a privatizar su anhelo de una rendición de cuentas de los militares por sus crímenes. Incluso después del arresto de Pinochet, la desaprobación del gobierno moderó la movilización de masas exigiendo justicia si no reparación. Por consiguiente, los movimientos de derechos humanos basados en el pasado fueron moldeados por las prácticas institucionales del nuevo régimen.

Mientras tanto, los cambios macropolíticos y macroeconómicos del decenio de 1990 tuvieron el efecto, más no la intención, de traer movimientos nuevos a escena. Fuera cual fuese la lógica económica de la reestructuración económica, la profundidad del proceso de reforma eliminó empleos, redujo oportunidades de ingresos para los pobres rurales y urbanos, aumentó el costo de la vida, generó nuevas desigualdades e hizo que el pueblo fuera más vulnerable a las vicisitudes del mercado. Las condiciones cambiadas generaron nuevas quejas, incluso entre nuevas categorías de gente, y nuevos esfuerzos colectivos por cambiar a su vez. El comercio, por ejemplo, se volvió más contencioso, ya que los consumidores se encolerizaron por las alzas de los precios y los comerciantes al menudeo se opusieron a nuevos impuestos a sus negocios. Los trabajadores de cuello blanco del estado, que sufrieron pérdidas de sueldos y desempleo con la reducción neoliberal del sector público, se declararon en huelga como nunca antes. Al mismo tiempo, nuevos movimientos étnicos surgieron en países que todavía tenían una población indígena considerable. Estos movimientos fueron también, en parte, respuestas a los efectos adversos de las reformas económicas, en un medio político que aceptaba más los derechos colectivos.

La variedad de los movimientos de base económica, y mucho menos otros movimientos, no puede comprenderse independientemente de la política y la cultura. En primer lugar, los gobiernos latinoamericanos fueron responsables de iniciar las nuevas políticas económicas. Las reformas no fueron simplemente el resultado de la dinámica del mercado funcionando por sí solo. En segundo lugar, las respuestas a las políticas fueron moldeadas por las relaciones sociales en las que las reformas están engastadas. Cuanto más débil y más politizado era un régimen, más probable era que la gente se opusiera a las políticas que le desagradaban. De igual manera, las relaciones estado-trabajo moldearon respuestas "populares". Las protestas contra la reestructuración neoliberal fueron más frecuentes en los países en donde la sociedad civil estaba muy politizada por medio de los sindicatos (Waltos, 1998). En tercer lugar, la naturaleza de las transiciones democráticas influyó en las respuestas a las reformas neoliberales impopulares. Aunque con la transición del gobierno castrense se institucionalizaron oficialmente canales de articulación de intereses y de rendición de cuentas del gobierno, la sociedad civil, en algunos países, se volvió más enérgica con la apertura política. La democratización redujo los riesgos del desafío, produjo nuevas expectativas y permitió identidades que estuvieron sumergidas bajo el gobierno autoritario. Al mismo tiempo, los nuevos gobiernos a menudo dejaron los intereses ciudadanos desatendidos. Comprometidos con el neoliberalismo, los gobiernos se volvieron fiscalmente más austeros y más reticentes en su gasto social. Además, cuando la democratización indujo la competencia de los partidos políticos por el apoyo de las

masas, los sectores "populares" estuvieron en una buena posición para ejercer presión con miras a obtener concesiones por medio de la militancia. Sin embargo, cuando la democratización entrañó pactos que contenían oposición, la sociedad civil fue menos enérgica.

El "engrosamiento" mismo de la sociedad civil que la redemocratización hizo posible generó nuevas bases de acción colectiva. El "engrosamiento" socavó el poder relativo, la autoridad y la influencia de las clases dominantes y gobernantes. Con ello, las culturas subalternas se fortalecieron hasta el grado de que la asimilación la aculturación y el asentimiento cayeron un poco en desgracia. En las condiciones diferentes, los grupos ejercieron presión por el respecto de sus diferencias y por nuevas demandas ciudadanas.

El repertorio de movimientos también fue influido por nuevas participaciones de las organizaciones no gubernamentales, ONG. Directa e indirectamente las ONG contribuyeron a la formación del movimiento social y a nuevos tipos de esfuerzos colectivos para lograr el cambio. Al contribuir al "engrosamiento" de la sociedad civil y proporcionar recursos humanos y materiales, las ONG cultivaron un clima social conducente a movilizaciones para nuevos fines. Las ONG animaron nuevas identidades y nuevos esfuerzos colectivos para resolver problemas previamente abordados y corregidos, en el mejor de los casos, individualmente (véase Chalmers, Vilas et al., 1996). También enmarcaron las cuestiones de modos que llamaron la atención y llevaron recursos a los grupos locales.

De manera característica, cuanto más escasas fueron las medidas del estado, mayor fue el impacto de las ONG. Las ONG de importancia han sido tanto de origen nacional como internacional. Incluso las ONG nacionales dependieron con frecuencia de redes, fuentes de comunicación y financiación internacionales y también apelaron a las normas internacionales. Muchas de ellas, asimismo, dependieron, no obstante su estatus formal, del apoyo nacional y de gobiernos extranjeros (véase Keck y Sikkin, 1998).

Los nuevos movimientos sociales fomentados por las ONG fueron repercusión de un cambio en la política exterior de Estados Unidos, así como del resurgimiento de la sociedad civil con la redemocratización. Empezando con el gobierno de Ronald Reagan (1980-1988), Washington redujo la ayuda bilateral y fue favorable al sector privado, la ayuda voluntaria y la reducción de la responsabilidad de grupos independientes para realizar misiones financiadas por el gobierno. Después del fin de la guerra fría, la ayuda de Estados Unidos se redujo más, basada, como lo había estado la ayuda bilateral, en consideraciones políticas más que humanitarias. En el nuevo contexto internacional, la importancia relativa, y no meramente absoluta, de las ONG aumentó.

Pero la influencia de las ONG aumentó también porque nuevas inseguridades hicieron que la gente estuviera abierta a la ayuda. Las reformas económicas neoliberales y la represión política, de maneras señaladas previamente, hicieron que la clase baja, la clase trabajadora y segmentos de la clase media fueran más

vulnerables social y económicamente. La iglesia católica, que estaba en crisis, abogó por la movilización incipiente para el cambio que estaba avivada por las ONG. Las Comunidades Eclesiales de Base fueron una fuerza tras la serie de movimientos, seculares más que religiosos, que surgieron en las esferas rural y urbana.

Las ONG llenaron un importante vacío social bajo las dictaduras. Aunque continuaron después de la vuelta al gobierno civil, su centro de acción cambió: de las demandas defensivas contra las injusticias a las iniciativas de acción por nuevos derechos. Las ONG contribuyeron a una modificación en la manera en que la sociedad civil se organizó y para qué fines lo hizo. En parte, mediante la expansión de las esferas de movilización, las ONG crearon espacios en donde nuevas relaciones se formaron y nuevos tipos de demandas tuvieron voz. Las ONG indujeron a las mujeres, en particular, a ser menos pasivas y a aceptar menos su sino. Sin embargo, con la vuelta de la democracia y la iniciación de programas contra la pobreza (por escuálidos que fueran esos programas), las ONG cultivaron movimientos en muchos países en donde éstos habían perdido impulso.

Algunas ONG, aunque no todas, cambiaron en el decenio de 1990. A medida que los donantes bilaterales y multilaterales redujeron su financiación a las ONG después de la guerra fría, las organizaciones no gubernamentales se hicieron más dependientes de la financiación privada y, a la vez, más sujetas a la lógica del mercado. Como resultado de esto, las ONG se volvieron menos responsables hacia aquellos que afirmaban representar.

Con experiencias de globalización semejantes, hubo cierto movimiento de homogeneización panregional en el decenio de 1990. Pero la homogeneización estaba basada en grupos y gobiernos que aprendían unos de otros, y no en respuestas semejantes a procesos compartidos de origen internacional. Por una parte, los gobiernos latinoamericanos se copiaron unos a otros, de forma que suscitaban movimientos semejantes. En segundo lugar, los grupos se emularon mutuamente entre las naciones. Por ejemplo, Las Madres de Plaza de Mayo inspiraron a otros movimientos en el continente. Se convirtieron en un modelo para las luchas femininas por los derechos de la mujer y los derechos humanos básicos. En tercer lugar, los medios de comunicación modernos llevaron y trajeron mensajes hasta y desde las zonas más remotas del continente. Por consiguiente, los movimientos indígenas, como el de los zapatistas en la región más pobre de México, del que hablaremos después, diseminaron electrónicamente información que puso en marcha otros movimientos dentro y fuera de las fronteras.

Sin embargo, ciertos movimientos basados en tendencias globales adquirieron características regionales distintivas. Las "protestas contra el FMI" descritas por Walton, por ejemplo, se implantaron en el repertorio latinoamericano en el decenio de 1990, aun cuando las protestas permanecieron relativamente localizadas y fueron de corta duración. Ninguna otra región experimentó tantas. Y en América Latina esas protestas fueron más de género, es decir, más basadas en las mujeres y, en comparación especialmente con África del Norte y el Medio Oriente, más seculares en su orientación. En estas últimas regiones la cólera por las reformas

neoliberales fue canalizada a través de los movimientos fundamentalistas que proliferaron (véase Walton, 1998).

Sin embargo, en ningún país latinoamericano las "protestas contra el FMI" han tenido un impacto tan grande como en Indonesia en 1998. Las medidas de austeridad allí suscitaron un movimiento que derrocó al gobernante autocrático Suharto, notoriamente corrompido. Gobernantes comparables en América Latina, como Batista, Somoza y Stroessner, en Cuba, Nicaragua y Paraguay, respectivamente habían sido derrocados por movimientos de masas en decenios anteriores.

Los diferentes efectos de los movimientos con la misma base económica global indican las maneras continuas en que las condiciones políticas y la cultura moldean la protesta. De hecho, aun cuando hubo grandes experiencias semejantes, los países de América Latina tuvieron un espectro de movimientos desiguales en el decenio de 1990, lo mismo que en los decenios precedentes, debido a las diferentes tradiciones y condiciones locales. Por ejemplo, los movimientos de protesta en Colombia siguieron consolidando una vieja tradición de violencia. Y las protestas urbanas fueron más notorias en los países en donde el pueblo estaba más urbanizado, subempleado, económicamente vulnerable y politizado: en Perú, Brasil, Venezuela, Argentina, Chile y Bolivia (Walton, 1998).

## BASES SOCIALES DE DESAFIO

En mi introducción señalé que los movimientos sociales variaron de acuerdo con su base social, aunque no de una manera mecánica y predeterminada. La gente no responde a las grandes reformas de una manera abstracta, sino según la forma en que las viven concretamente.

Los factores de contexto –la cultura, las estructuras institucionales, los lazos entre clases y las opciones reales o así percibidas- tanto como, a su vez, las respuestas de la élite, las alianzas de clase y las fuerzas económicas y políticas globales moldearon, desde el decenio de 1960 hasta el de 1980 incluido, los movimientos y sus resultados. Más adelante muestro cómo estos factores continuaron teniendo importancia en el decenio de 1990 con respecto tanto a los movimientos que los autores de este libro analizaron en los últimos años del decenio de 1980 como a los movimientos que surgieron después.

No pretendo considerar todos los movimientos surgidos en el decenio de 1990. Me centraré en una muestra, y solamente en lo que se refiere a sus bases sociales. Las bases sociales delineadas a continuación deberían verse como analítica, mas no necesariamente empíricamente diferenciables. En el mundo cotidiano, la gente que se agrupa en un solo movimiento puede compartir una serie de atributos socialmente importantes, y esos atributos pueden reforzar mutuamente e influir de manera concomitante. Pero precisamente debido a que la gente que pertenece a un



movimiento cualquiera tiene también atributos que la expone a diferentes experiencias y puntos de vista, ésta puede estar sujeta a influencias diferentes y tal vez contrarrestantes. La gente tiene experiencias, expectativas y valores diferentes que la llevan a situaciones específicas.

Cabe señalar también que la base social de los movimientos no determina necesariamente por sí misma las preocupaciones y la dinámica del movimiento. Los recursos, la dirección y los factores de contexto son también importantes.

#### Movimientos con base en las relaciones económicas

En respuesta al estímulo y a la presión de Washington, de los bancos internacionales y de los asesores extranjeros, el neoliberalismo, como un conjunto de políticas y de filosofía económica, provocó una espectacular reestructuración económica en toda América Latina (y el mundo). El neoliberalismo, que dio prioridad a la dinámica del mercado sin trabas, generó nuevas desigualdades y nuevas injusticias en una región que ya había tenido la peor desigualdad económica en el mundo. Mucha gente en la región respondió con pasividad o estableció formas de acción clandestinas. Sin embargo, en una serie de ocasiones los latinoamericanos de diversa posición socioeconómica se opusieron a aspectos de las reformas que juzgaron especialmente atroces. Sus respuestas fueron conformadas por sus experiencias objetivas y por los marcos culturales a través de los cuales veían tales experiencias.

#### Movimientos de base campesina

Fueron las variantes del marxismo las que inspiraron a los movimientos rurales durante los decenios de 1960-1980, tal como lo describe Wickham-Crowley. El colapso del bloque soviético y de la Unión Soviética y la crisis que Cuba sufrió como consecuencia socavaron las fuentes externas de entrenamiento, financiamiento e inspiración de las guerrillas latinoamericanas al término del siglo. Sin embargo, la suerte de los movimientos guerrilleros sólo ha dependido parcialmente del nuevo contexto internacional, porque los movimientos siempre estuvieron muy fincados en las condiciones internas. Puesto que los campesinos experimentaron nuevos trastornos y nuevas miserias con las reformas neoliberales, y que las estructuras estatales y la sociedad civil seguían siendo débiles en el campo, continuó una base potencial para la actividad guerrillera (Degregori, 1986; Degregori et al., 1996). Lo que cambió, con ramificaciones importantes, fue el origen del financiamiento de las guerrillas. Cada vez más, los rebeldes recurrieron a los secuestros y al dinero de las drogas para obtener ayuda material.

Sendero Luminoso –cuya historia describió McClintock detalladamente– expandió su base social en los primeros años del decenio de 1990 no sólo en las regiones que tenían plantaciones de coca, sino también en las grandes barriadas miserables de Lima, la capital del país. La incapacidad del estado para suministrar los servicios públicos elementales, para frenar la actividad en materia de drogas y para evitar una depresión económica radical (como se demostraba por las tasas de

crecimiento negativas, la hiperinflación y el aumento de la pobreza) proporcionó un terreno fértil a Sendero Luminoso para reclutar partidarios mediante tácticas de "zanahoria" y "garrote". El gobierno del presidente Alan García, a mediados del decenio de 1980, quedó desacreditado en seguida una vez que su capacidad para dar, económica y políticamente, se derrumbó. A su vez, disminuyó el apoyo para el partido de García, el APRA, y las tensiones entre los partidos políticos de izquierda socavaron la capacidad del sistema de partidos para desempeñar un papel mediador entre el estado y la sociedad (véanse Burt, 1998: Burt y Espejo, 1995). Sendero Luminoso se aprovechó de la situación para debilitar la legitimidad que le quedaba al gobierno y al partido político. Aún cuando Sendero apoyaba las demandas de los invasores ilegales de tierras y ofrecía ayuda material limitada, desplegó tácticas terroristas. Los miembros de Sendero Luminoso se dedicaron a asesinar, a celebrar huelgas armadas y actos de sabotaje. En los primeros años del decenio de 1990 Sendero Luminoso afirmó contar con unos 25,000 militantes y controlaba aproximadamente una cuarta parte de todos los municipios, pero lo más importante era que socavaba el orden moral, social y político.

Un giro en la suerte de Sendero ocurrió cuando el sucesor de García, Alberto Fujimori, desplegó una estrategia enérgica de dos puntas: el aumento de la represión combinado con movilizaciones de las comunidades contra Sendero Luminoso. Su gobierno expandió las rondas de los Comités de Autodefensa Civil, unidades de defensa antisenderistas formadas por civiles campesinos. A mediados de 1993 había más de 4,000 de estas rondas, en las que participaban unos 300,000 campesinos. La iniciativa contraguerrillera se construyó sobre la solidaridad comunitaria con la combinación de un aumento de las prestaciones sociales y un fortalecimiento de la capacidad de protección. El gobierno de Fujimori dio a las rondas alimentos, medicinas y armas, mientras que el ejército extendió los programas de acción cívica a las comunidades involucradas (McClintock, 1997).

Las rondas representan un movimiento generado por el estado. Los movimientos no necesitan ser en contra del estado (como Zamosc lo ilustró también con la NUP, en el contexto de Colombia). En realidad, la lucha se estableció entre los campesinos que tenían asistencia del estado y los que no la tenían, no entre el estado y el campesinado. La disposición hacia la formación de rondas y el impacto que éstas tuvieron varió según la comunidad. Los campesinos fueron más receptivos allí donde deseaban que la brutalidad de Sendero Luminoso y el modelo agrario colectivista de esta guerrilla llegaran a su fin (véase Degregori et al., 1996).

El golpe de gracia a Sendero (así como al movimiento guerrillero Tupac Amaru, de base más urbana) llegó, sin embargo, con una campaña gubernamental para capturar a la dirección de la guerrilla. Con la decapitación y el encarcelamiento de los altos mandos de Sendero Luminoso, el movimiento tuvo un revés importante aunque, en una escala muy reducida, el grupo guerrillero conserva cierto apoyo en algunas regiones. Con el 85% de la fuerza laboral sin trabajo de tiempo completo y la mitad de la población viviendo en la pobreza a mediados del decenio de 1990 (en comparación con el 38% en 1985), los problemas sociales y económicos que impulsaron al movimiento persistieron. Sin embargo, por lo menos a corto plazo, el ejemplo peruano indica que la represión puede socavar un movimiento de guerrilla si se ejerce con habilidad y está apoyada por los civiles (McClintock, 1997). La captura de Abimael Guzmán desactivó al movimiento. Guzmán, dirigente de

Sendero Luminoso, era reverenciado como una deidad por sus discípulos. Si la dirección de Sendero hubiera sido menos jerárquica y más descentralizada, la captura de Guzmán habría tenido menos consecuencias para esa guerrilla. Al fomentar su veneración, Guzmán contribuyó, sin querer a las condiciones mismas que serían la pérdida del movimiento.

En América Central los movimientos guerrilleros basados en el campesinado también parecieron llegar a su ocaso al finalizar el siglo, aunque no antes de que unas 300,000 personas fueran muertas y unos dos millones fueran obligadas a abandonar sus comunidades. Como muestra de la brutalidad que la lucha civil había producido, unos de cada 150 centroamericanos, más o menos, perdió la vida durante los decenios de guerra de guerrillas; Nicaragua, El Salvador y Guatemala fueron los países que más sufrieron. Al igual que en Perú, el aplacamiento de los movimientos llegó con cambios en el gobierno del estado y en las políticas estatales, pero también con un cambio en la política exterior de Estados Unidos. Este gobierno había proporcionado gran parte de los recursos y el entrenamiento para la violenta represión estatal contra la guerrilla. Sin embargo, en América Central, a diferencia de Perú, el cambio en las políticas estatales estuvo basado en la conciliación y en un deseo de los grupos guerrilleros de deponer las armas y tomar parte en la política electoral. Al convenir en elecciones y respetar sus resultados, las guerras civiles en Nicaragua, El Salvador y Guatemala terminaron.

En El Salvador y Guatemala las autoridades gubernamentales firmaron acuerdos de paz con los principales grupos guerrilleros de tendencia izquierdista. Capaces de desestabilizar a los regímenes, mas no de apoderarse del estado y transformar a la sociedad, la dirección de las fuerzas guerrilleras de otro tiempo en los dos países convinieron en el desarme, en organizarse como partidos políticos y en competir electoralmente por el derecho de gobernar, compromisos que entrañaban acallar sus ambiciones sociales y económicas. Al mismo tiempo, la derecha política en los países respectivos, aliada con la élite terrateniente, retiró sus fuerzas paramilitares. En estas circunstancias, los guerrilleros, convertidos en demócratas, ganaron el control de un número de municipios y de escaños en el Congreso en El Salvador. En Guatemala, la derecha, con inclusión de los militares, permaneció más fuerte, más violenta y menos dada al compromiso político, aunque, como se detalla más adelante, toleró una apertura política que permitió que tanto el sector "popular" como los grupos indígenas tuvieran voz. Sin embargo, en ambos países centroamericanos, al igual que en Perú, las perspectivas de paz a largo plazo se basan en la resolución de los problemas socioeconómicos "subyacentes". Los acuerdos de paz, por ejemplo, incluyen la reforma agraria, pero la aplicación de esta reforma en gran escala no ocurrió en el decenio de 1990 (Paige, 1996).

El acuerdo de paz resultó menos eficaz para contener la actividad guerrillera en Colombia. En el decenio de 1990 la lucha civil en este país sudamericano fue más extendida y violenta que en ningún momento de los treinta años precedentes (véase Chernick, 1997). Al finalizar el siglo, las fuerzas paramilitares y los ejércitos privados locales habían entrado en esa guerra que previamente había sido librada entre las guerrillas y los militares. Y aunque el M-19, el Movimiento del 19 de abril, había depuesto las armas y había empezado a participar en la política electoral como un partido político, los movimientos

guerrilleros principales no hicieron lo mismo. La violencia y otros abusos de los derechos humanos estallaron. Bajo una apariencia superficial de democracia, el imperio de la ley se desintegró. En 1996, Colombia tuvo una de las tasas de homicidios más elevadas del mundo, y la tasa más alta de muertes por motivos políticos. Hubo más de 26,000 asesinatos en el país aquel año, y 35,000 entre 1988 y 1998, varias veces más que bajo cualquiera de los regímenes militares sudamericanos, notablemente represivos, del decenio de 1960 hasta el de 1980 incluido. Alrededor del 62, 27 y 11% de las muertes colombianas a mediados del decenio de 1990 fueron atribuidas, respectivamente, a los paramilitares, las guerrillas y los militares. La lucha dejó, también, más de un millón de refugiados colombianos en su propio país (New York Times, 6 de enero de 1999:11). El conflicto fue centrando cada vez más en la cocaína, no en la ideología.

¿Por qué la actividad guerrillera fue más difundida y violenta en Colombia cuando disminuyó en los países vecinos? En primer lugar, en Colombia los grupos guerrilleros más importantes nunca convinieron en deponer las armas. En segundo lugar, el país tiene una cultura de violencia en la cual se apoyan los grupos de tipo feudal. Esta cultura no explica por sí sola la explosión de violencia, pero proporciona un marco cultural que hace la violencia más probable. En tercer lugar, la democracia formal en el nivel nacional ocultó la violencia y, con ello, moderó los esfuerzos nacionales e internacionales por acabar con los abusos. Cuarto: la autoridad del estado se fue debilitando a medida que se fue afianzando la economía con base en el comercio ilegal de las drogas. Las guerrillas aumentaron la cantidad de secuestros, asesinatos y extorsiones, especialmente en las regiones productoras de coca, y defendieron a los campesinos que la cultivaban. Defendieron también a los productores de coca a cambio de un "impuesto a la cocaína". En 1977 se dice que obtuvieron 60 millones de dólares en un mes.

La raíz del problema es la demanda internacional creciente de cocaína. Colombia, el mayor productor del mundo de pasta de cocaína, tiene una ventaja comparativa en la producción de esta droga, y ninguna otra actividad económica en Colombia es tan lucrativa. Por consiguiente, lo que está en juego en Colombia es mucho, y los intereses creados por el mercado de las drogas están bien organizados. En estas circunstancias, el gobierno ha sido debilitado hasta el punto de que tiene dificultades para imponer el orden, ya sea mediante la represión o la reforma. Ya no podía aplicar un movimiento de reforma al estilo de la ANUP, como había hecho veinticinco años antes (véase el ensayo de Zamosc) ni seguir una estrategia que combinara la represión bien orientada con la reforma, como hizo el gobierno de Fujimori en Perú.

Mientras tanto, el gobierno de Estados Unidos se convirtió en parte del problema, en el proceso mismo de intentar ser su solución, la intervención de ese país tuvo el efecto, no la intención de exacerbar la violencia y la ruptura del imperio de la ley. Junto con su "Guerra de drogas", Washington aumentó la ayuda militar para combatir ese problema "en su origen". A mitad que la ayuda militar aumentó, aumentó también la brutalidad militar. Y, como parte de la "Guerra a las drogas", Estados Unidos respaldó los proyectos de erradicación de los cultivos de coca, lo cual encolerizó a los cultivadores de la misma hasta el punto que se movilizaron en protesta y se aliaron con las guerrillas. Por ejemplo, unos 241,000 campesinos cultivadores de coca, viendo sus medios de subsistencia amenazados, realizaron una marcha de protesta en 1996. El gobierno de Colombia, amenazado

con una intranquilidad masiva, redujo el programa de erradicación. Obligado a escoger entre acabar con la producción de coca o ver amenazado su derecho a gobernar, optó por sus intereses políticos institucionales inmediatos.

En una escala más reducida y menos violenta, la demanda internacional de coca produjo también tumultos en Bolivia. Bajo la presión de Estados Unidos y con su ayuda, el gobierno boliviano quiso erradicar los cultivos ilegales. Y también allí los cultivadores de coca no asintieron de buena gana en el Chapare, en donde se produce una cuarta parte del abasto mundial de cocaína (New York Times, 22 de febrero de 1998:4) los cultivadores de coca bloquearon las carreteras principales y lucharon contra las fuerzas de seguridad. El cultivo de coca no ha transformado a Bolivia en una sociedad tan polarizada y armada como la de Colombia, en parte porque los intereses económicos en el país andino son menores. Bolivia no elabora cocaína, actividad que es más lucrativa que el cultivo de la hoja de coca.

Al mismo tiempo, surgieron en México nuevos movimientos campesinos armados. Los zapatistas –el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional)-, fueron los más importantes políticamente. Aprovechando una identidad indígena cada vez mayor en Chiapas, el estado más pobre de México, el EZLN apareció en público allí el 1º. de enero de 1994. Por razones tanto simbólicas como estratégicas hizo coincidir su aparición con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El acuerdo formalizó el libre comercio, una característica principal del neoliberalismo. Aunque la aplicación del acuerdo no era la causa per se del nuevo movimiento, proporcionó un contexto alrededor del cual los zapatistas canalizaron que quejas, incluso sobre condiciones anteriores al neoliberalismo y sin relación con éste. Y al hacer coincidir su salida de la selva, en donde estuvieron entrenando, con la iniciación del acuerdo histórico, pudieron lograr que, en seguida, el mundo prestara atención a su causa. Los medios internacionales se encontraban en México para cubrir el acontecimiento.

Cabe señalar aquí que, desde el principio, los zapatistas, de los que hablaremos con más detalle luego, combinaron la guerrilla con tácticas populistas y electorales y enmarcaron el movimiento en el contexto de los derechos indígenas, no en alguna variante del discurso marxista o en un pragmatismo relacionado con las drogas. Aunque nunca instaron a la revolución, tomaron su nombre del héroe campesino de la transformación social del país en los comienzos del siglo XX y usaron capuchas parecidas a las usadas por los leales zapatistas.

A su vez, el gobierno mexicano, desde el principio, respondió de manera diferente a la de otros gobiernos de la región a sus respectivas movilizaciones guerrilleras. El gobierno mexicano ofreció inmediatamente negociar con los guerrilleros encapuchados; cuando ese esfuerzo fracasó, combinó la reforma con una represión contenida. Las autoridades iniciaron proyectos de desarrollo, en una escala previamente desconocida en Chiapas, y aumentaron los repartos de alimentos a los habitantes de los pueblos que colaboraron con ellas y se opusieron a los zapatistas. Cuando tanto las medidas de tipo “zanahoria” como las negociaciones no lograron acabar con el movimiento zapatista, las autoridades aumentaron la represión de la baja intensidad: aumentaron la presencia militar en la región, a los militares les permitieron atacar al EZLN armado y a los priístas

atacar a simpatizantes desarmados de los zapatistas; detuvieron y hostigaron a los simpatizantes de los zapatistas, y llevaron a los rebeldes a zonas aisladas del estado. Entonces, en 1997, los funcionarios dirigieron una infame matanza en un pueblo y al año siguiente lanzaron una campaña contra los "infiltrados" defensores de los derechos humanos. La represión del estado aumentó no porque el EZLN planteara una amenaza de guerrilla, sino porque estaba avivando cada vez más la oposición electoral al PRI nacionalmente, y no sólo en Chiapas.

La estrategia del gobierno mexicano, inicialmente flexible, en parte puede explicarse por lo que pudo aprender de errores pasados. Además, la fecha (no casual) elegida para la insurrección zapatista redujo sus opciones, en el caso de querer mantener una legitimidad nacional e internacional. El comienzo de la erosión de la hegemonía política del partido oficial y del gobierno (el PRI, Partido Revolucionario Institucional) se remonta a la brutal matanza de estudiantes en la ciudad de México en 1968. El uso de la brutalidad otra vez, en gran escala, hubiera podido acabar con el gobierno dirigido por el PRI. Pero el gobierno se moderó también a causa de la competencia cada vez mayor de los partidos políticos nacionales y de la participación de nuevos grupos de ONG de derechos humanos vinculados internacionalmente, así como de la presencia de los medios internacionales por la inauguración del TLCAN. En esas circunstancias, el gobierno necesitaba ser responsable de sus acciones (véase Keck y Sikkink, 1998).

Aun cuando al terminar el siglo los zapatistas nunca derrotaron militarmente a las fuerzas del gobierno ni establecieron un dominio político en Chiapas, su impacto fue importante. Como se describe en la sección de movimientos indígenas, el levantamiento zapatista desató en toda la nación una crítica cada vez mayor de las políticas del PRI, especialmente una vez que el "milagro" mexicano se convirtió en un fracaso después de la devaluación del peso en diciembre de 1994. Los zapatistas cuestionaron el modelo económico neoliberal como ningún otro grupo lo había hecho, e inspiraron una serie de movimientos sociales y de retos electorales al PRI.

Sin embargo, no todas las movilizaciones rurales a favor del cambio fueron canalizadas mediante movimientos de guerrilla. En Brasil, por ejemplo, los sindicatos rurales movilizaron a los pequeños agricultores y proletariado agrícola. Cerca de 3,000 sindicatos que representaban a ocho millones de jornaleros se establecieron ya bajo los gobiernos militares existentes desde 1964 hasta 1985 (véase Maybury-Lewis, 1994). Los militares cultivaron la sindicalización no porque estuvieran a favor de los jornaleros, sino porque pensaron en captar la mano de obra y, con ello, socavar la atracción que ejercían las ligas campesinas independientes y politizadas que Francisco Juliao había movilizado en los primeros años del decenio de 1960. Aunque el efecto del movimiento laboral rural varió regionalmente, incluso por cultivo, los sindicatos lograron negociar prestaciones de salud a cambio de su moderación. El impacto de los sindicatos dependió, en parte, de las alianzas locales que se forjaron entre clases. Con la democratización, los sindicatos rurales siguieron activos y fueron algo así como un contrapeso de los grandes agricultores políticamente poderosos. Sin embargo, no pudieron detener la concentración de tierras cada vez mayor, incluso después de la promulgación de una reforma agraria oficial. En un país que tenía una de las distribuciones de la tierra más desiguales del mundo, el número de cultivos pequeños bajó de más de

tres millones a menos de un millón en el decenio de 1990 (Lagevin y Rosset, 1997:2). En ese proceso las agroindustrias se afianzaron más.

Con la marginación de los pequeños agricultores y el número cada vez mayor de campesinos sin tierra, aumentaron las filas del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra (MST, Movimiento dos Sem Terra) y no sólo las de los sindicatos. El MST se orientaba al deseo de los jornaleros rurales tanto de tierras como de prestaciones sociales. Entre mediados del decenio de 1980, cuando fue creado, y mediados del decenio de 1990 el MST ayudó con éxito a negociar demandas de tierra para 146,000 familias que abarcaron casi cinco millones de hectáreas. Su reforma agraria de ipso "desde abajo" resultó tener más importancia que la reforma agraria de jure "desde arriba" del gobierno. El MST, que hizo hincapié en el fortalecimiento del sentimiento comunitario en los campamentos y de la solidaridad entre ellos urgió, igualmente con éxito, a la obtención de servicios adicionales de atención de la salud, educación y extensión agrícola. Para promover su causa el MST organizó invasiones de tierras no cultivadas, bloqueó carreteras y organizó una marcha de mil kilómetros, que duró dos meses, a la capital del país en 1997. El MST, el movimiento político brasileño más dinámico e influyente en el decenio de 1990, se benefició con el apoyo de los sindicatos y de grupos eclesiósticos y el gobierno de Fernando Henrique Cardoso se comprometió públicamente a establecer reformas y no ejercer represión. Pero el movimiento tuvo pérdidas y ganancias. Se dice que unos 1,000 activistas y simpatizantes sin tierra del MST fueron asesinados o heridos durante los diez primeros años de existencia del movimiento. Los efectivos de la policía militar que estaban de parte de los terratenientes fueron responsables de la mayor parte de las muertes (Hammond 1999; Langevin y Rosset, 1997).

## Protestas laborales

La reestructuración económica neoliberal afectó adversamente a los trabajadores en las regiones mineras y en las ciudades, así como en la agricultura, y a la clase media igual que a la clase trabajadora. El libre comercio y los recortes fiscales con el neoliberalismo debilitaron la posición de los sindicatos en las negociaciones, tanto en el sector público como en el privado. En tales circunstancias, las mejoras de la productividad no beneficiaron a los trabajadores. El salario real y las prestaciones vinculadas con el trabajo disminuyeron. La redemocratización, aun cuando en principio respetó el derecho de organización, en la práctica no produjo condiciones conducentes a la militancia de los trabajadores en el decenio de 1990. La actividad huelguística se reanudó con la aplicación inicial de las medidas neoliberales de reforma (Walton, 1998: 474-475) y con la reducción de la represión al comenzar la redemocratización, pero poco después fue disminuyendo, a pesar de la apertura política continua. Aunque las razones varían según el país, y en cada país con el transcurso del tiempo, la actividad huelguística tendió a disminuir gradualmente a medida que las políticas de austeridad se hicieron más rutinarias; la competencia internacional moderó las demandas de los trabajadores; se instituyeron "pactos" entre el estado y los trabajadores, que oficialmente hicieron de los sindicatos un socio hostil a los trabajadores en las reformas, y muchos trabajadores sindicalizados ya se habían quedado sin trabajo.

A pesar de las limitaciones estructurales, en el decenio de 1990 los trabajadores canalizaron sus quejas de diversas maneras. En Bolivia, los mineros, que habían ganado derechos políticos y económicos mediante su participación en la revolución nacional-populista de 1952, sufrieron el golpe de gracia definitivo a mediados del decenio de 1980. el gobierno de Paz Estensoro, el dirigente de la revolución, había vuelto al poder como un neoliberal de nuevo cuño. Ahora su gobierno, con el respaldo de Estados Unidos y del FMI, cerró las minas de estaño que había nacionalizado durante su primer mandato. Durante un tiempo, los trabajadores tuvieron el derecho de coadministrar las minas a cambio de su apoyo en la insurrección contra la oligarquía.

Fuera cual fuese la lógica económica para cerrar las minas, los mineros no asintieron pasivamente a la eliminación de su medio de subsistencia. Los mineros – que viven en un relativo aislamiento geográfico, son bastante homogéneos económicamente y padecen condiciones de trabajo difíciles- han sido notables en todo el mundo por su militancia. En Bolivia no fueron la excepción a fines del decenio de 1980 al igual que en tiempos anteriores. Los mineros organizaron una huelga de hambre y una marcha desde las minas, por el campo, hasta la capital de la nación, la ciudad de la Paz. A esta marcha se unieron unos 10,000 campesinos, maestros, comerciantes, estudiantes y dirigentes religiosos que dependían de las comunidades mineras para trabajar, que simpatizaban con los mineros y que se oponían, por sus propias razones, a otras reformas económicas neoliberales (por ejemplo, los nuevos impuestos propuestos por el FMI). Tal como June Nash describe tan vívidamente en su caso ensayo en este libro, los mineros nunca rompieron con sus raíces agrarias, social o culturalmente. Los lazos continuos entre campesinos y mineros llevaron a una resistencia interclases a las reformas neoliberales.

Las protestas de nada sirvieron. El gobierno, fiscalmente necesitado y dependiente del apoyo financiero internacional, cedió ante los financieros extranjeros y su demanda de cerrar las minas, que desde hacía mucho tiempo no eran competitivas globalmente. En ese proceso, los mineros perdieron su empleo y más. Sus comunidades fueron destruidas y sus familias fueron trastornadas y, con frecuencia, deshechas. Puesto que sus comunidades las opciones de un empleo alternativo prácticamente no existían, muchos mineros emigraron. Según la terminología de Albert Hirschman (1970) "salieron" cuando el gobierno se negó a responder a su "vez".

A los ex mineros les fue económicamente mejor en Chapare, donde se unieron a la economía floreciente de la ya mencionada coca. Aunque Washington tampoco aprobó esta fuente de subsistencia, sus fondos antinarcóticos, su capacitación y su equipo (como ocurrió en Colombia) provocaron el empleo clandestino y avivaron la corrupción, pero no terminaron con el cultivo comercial de la coca.

Al destruir las comunidades y las familias, el cierre de las minas produjo también otros problemas y cambios sociales. Nash, que volvió allá en 1994 para investigar los efectos del cierre de las minas, observó que la ingestión de bebidas alcohólicas, la adicción y el robo habían aumentado. Algunos mineros buscaron



solaz en la conversión religiosa, sobre todo a los Santos del Último Día, que hizo proselitismo en la región.

La protesta en Bolivia no se limitó a las minas y al campo circundante. Los trabajadores del sector público cerraron el sistema de transporte y saquearon las tiendas cuando las reformas neoliberales los dejaron sin trabajo y provocaron el aumento de los precios al consumidor. Al igual que en otras partes en la región, las privatizaciones polarizaron al sector público, mientras que la redemocratización hizo que las protestas fueran menos peligrosas. El gobierno, sin recursos, no estaba en posición de contener las protestas ni con medidas de "zanahoria" ni con medidas de "garrote".

Las víctimas de las reformas neoliberales protestaron también en estados más fuertes. Con la reestructuración económica, la actividad huelguística aumentó en Argentina, y los focos de huelga pasaron del sector privado a los sectores público y de propiedad mixta, de la clase trabajadora a la clase media y de Buenos Aires, capital y epicentro histórico de la militancia laboral, a las provincias. Las reducciones de salarios y la retención de los sueldos en el sector público, tanto bajo el presidente peronista Carlos Saúl Menem como bajo su antecesor del partido Radical, Raúl Alfonsín (1983-1989), por ejemplo, atizaron las protestas (McGuire, 1996). Los dos gobiernos dieron prioridad a su propia preocupación institucional, la reducción del déficit fiscal, por encima de los derechos de los trabajadores a un sustento, con inclusión del derecho a recibir un pago por servicios rendidos. Las confrontaciones resultaron especialmente violentas cuando las autoridades retuvieron los cheques de pago de sueldos. Hubo incendios de automóviles y saqueos de edificios.

Sin embargo, las huelgas en Argentina no revelan una relación mecánica entre la privación económica y la protesta. El número de huelgas, de huelguistas y de días perdidos por las huelgas fue menor bajo Menem en el decenio de 1990 que bajo Alfonsín en el decenio de 1980, aun cuando la reestructuración más enérgica de Menem entrañó despidos y privaciones mayores. En Argentina, como en otras partes, el control de la inflación por parte del gobierno fue políticamente popular, aun cuando estuvo asociado con una disminución de los salarios reales y del empleo.

De igual manera, la actividad huelguística en Brasil fue una cuestión política y no meramente económica. El número de huelgas, el número de huelguistas y la duración de las huelgas pasó de cero, durante el período más represivo de gobierno militar, a más de 2,000 durante los primeros años siguientes a la restauración del gobierno democrático. La actividad huelguística aumentó cuando, en realidad, las condiciones laborales mejoraron. Aumentó porque los riesgos de la rebelión disminuyeron con la transición política (Noronha, Gebria y Elías, 1998) pero también porque el movimiento sindical había estado inspirado y potenciado por la labor de los grupos eclesiósticos (Castañeda, 1993:207).

Sin embargo, en Brasil, al igual que en Argentina, las huelgas laborales disminuyeron gradualmente al hacerse habitual el gobierno democrático. El número de huelgas al año bajó a menos de 1,000 a mediados de decenio de 1990 aun cuando las condiciones de trabajo siguieron deteriorándose con las políticas de austeridad inducidas por el FMI. En Chile, aún más, la militancia laboral se convirtió en una sombra de lo que fue. El "pacto" de centro-izquierda llamado Concertación de Partidos por la Democracia, que se formó con la redemocratización, privó a los trabajadores del apoyo político que tuvieron en el periodo anterior a Pinochet. Los partidos que concertaron el "pacto" dieron prioridad al ejercicio del poder y al neoliberalismo por encima de la defensa de los intereses inmediatos de los trabajadores.

Un estudio comparativo de algunos países latinoamericanos indica que la huelga laboral varía según el partido político en turno y la dinámica institucional de los sindicatos, de manera algo independiente de las condiciones macropolíticas y macroeconómicas. La militancia laboral varió sectorialmente, dentro de los países y entre ellos, con la competencia de sindicatos y partidos. La militancia laboral fue mayor cuando los partidos políticos compitieron por el voto de los trabajadores, mientras que la competencia de los sindicatos fue mínima (Murillo, 1998).

Incluso en Costa Rica, con su larga tradición democrática y de asistencia social, hubo protestas cuando las autoridades se unieron a la reestructuración neoliberal. También allí las privatizaciones de empresas públicas y los despidos instigaron enfrentamientos con la policía.

#### LOS MOVIMIENTOS URBANOS NO SINDICALIZADOS Y EL DESAFÍO SOCAPAN EL IMPERIO DE LA LEY

En toda América Latina las protestas urbanas de origen económico no se limitaron a los trabajadores sindicalizados. De hecho, a medida que las reformas neoliberales contribuyeron a una contracción de las oportunidades de trabajo en el sector formal, y a medida que por ello más miembros de la fuerza laboral vinieron a depender del empleo en pequeña escala, no sindicalizado, las condiciones en los centros de trabajo fueron cada vez menos propicias al desafío colectivo. La fuerza laboral se volvió más atomizada al mismo tiempo que se hizo más vulnerable económicamente. Cuando los habitantes de las ciudades no pudieron presionar por mejores sueldos y otras prestaciones, adoptaron estrategias colectivas para minimizar sus gastos. Las menores oportunidades económicas también condujeron a más actividades ilícitas.

Apoyándose en las "protestas contra el FMI" del decenio de 1980, las clases media, trabajadora y más baja en las ciudades protestaron en el decenio de 1990 contra la reducción de los subsidios por parte del estado. Como ejemplo de esta causa de desafío, los estudiantes venezolanos se amotinaron contra las reducciones en los subsidios a las escuelas y a los transportes y, en la República Dominicana, en 1997 los apagones junto con los aumentos de precios suscitaron protestas en más de doce ciudades. Los manifestantes incendiaron llantas y

automóviles, arrojaron piedras y bombas caseras a la policía, y celebrando una huelga general (organizada por una coalición de grupos sindicales y estudiantiles). Y en Argentina, ese mismo año, decenas de miles de estudiantes y vendedores ambulantes se unieron a empleos iracundos, en activo o despedidos del sector público, así como a los cañeros, para bloquear carreteras y edificios del gobierno, lanzar piedras y levantar barricadas en las ciudades de nueve provincias.

México, donde el gobierno había logrado contener las protestas durante decenios por medio de instituciones políticas nominalmente populistas, políticas corporativistas y discurso revolucionario, tampoco fue excepción. La única ocasión en que el gobierno disparó brutalmente contra manifestante estudiantiles en la ciudad de México, en 1968, fue un parteaguas en la capacidad de persuasión del estado. Sin embargo, fue necesaria la severa contracción económica del decenio de 1980 para que los movimientos sociales populares que no estaban afiliados al estado ganaran amplio apoyo y alteraran los conceptos de la ciudadanía (véanse Davis 1994; Forewaker, 1989; Forewaker y Craig, 1990; Tamayo, 1989 y 1997; Zermeño, 1997). En la época, los movimientos sociales como Conamup (Coordinadora Nacional de Movimientos Urbanos Populares) aprovecharon la cólera contra el gobierno y contra el PRI, a falta de un partido de izquierda viable para defender la causa del sector "popular". Los movimientos urbanos populares aumentaron su número de miembros y su influencia después del terremoto de 1985, como describí en el capítulo 6 (véase también Eckstein, 1988). Los damnificados, como fueron llamadas las víctimas del terremoto, presionaron con éxito al gobierno para obtener viviendas que pudieran pagar. El movimiento en pro de la vivienda fue especialmente interesante porque ocurrió entre los moradores del centro de la ciudad, a los que los urbanistas habían desdeñado, considerándola gente apática, incapaz de organizarse y abrumada por una "cultura de desesperanza". A pesar de las apariencias iniciales de apatía, cuando los moradores del centro de la ciudad fueron amenazados con la demolición de sus viviendas para reconstruirlas se organizaron con gran inventiva para salvar sus vecindarios. Estas personas lucharon colectivamente para obtener nuevas viviendas, porque consideraron que están enfrentando una crisis comúnmente compartida sin tener ninguna alternativa atractiva. Construyeron su movimiento para obtener viviendas sobre viejos lazos locales de carácter social, económico y cultura, mientras que se beneficiaron con el apoyo de individuos y grupos "mejor situados", que se habían distanciado del PRI y del gobierno desde la matanza de estudiantes de 1968.

El movimiento por la vivienda en el centro de la ciudad se produjo en una época en la que los movimientos de invasores ilegales de tierras en México, y en otras partes de la región, estaban declinando. Las invasiones organizadas disminuyeron no porque el sector "popular" tuviera suficientes viviendas asequibles. Las invasiones de tierras, y su eficacia, demostraron depender de condiciones macropolíticas y macroeconómicas que ya no existían. Durante la política de sustitución de importaciones, los gobiernos, para favorecer a la industria urbana sobre la agricultura, toleraron las invasiones ilegales de tierras y acomodaron a los que emigraban a la ciudad de acuerdo con su sesgo populista urbano. Los partidos políticos, en el poder o fuera de él, defendieron las demandas colectivas e ilegales de tierras a cambio de lealtad política. Pero en el decenio de 1990 las condiciones ya no favorecían las invasiones ilegales de tierras por varias razones. En primer lugar, los estados neoliberales, más austeros, ya no se definían a sí mismos como populistas. Por consiguiente, disminuyeron el suministro de servicios urbanos que tales asentamientos requerían y se hicieron menos sensibles a los intereses del "sector popular". En segundo lugar, cuando prevaleció la política de sustitución de

importaciones, los gobiernos sólo toleraron a los invasores ilegales que ocuparon tierras públicas (o propiedad de campesinos políticamente débiles). Al término del siglo, la mayor parte de las tierras públicas ya habían sido ocupadas. Mientras tanto, los terratenientes se volvieron más enérgicos en la defensa de sus propiedades y los urbanizadores, que previamente habían apoyado los asentamientos irregulares, tuvieron acceso a alternativas más provechosas. En tercer lugar, los gobiernos neoliberales se inclinaron hacia los procesos de mercado, no hacia los de carácter político. De acuerdo con su sesgo, favorecieron los tratos comerciales informales sobre invasiones de tierras como un medio para atender la demanda creciente de vivienda asequible (Durand-Lasserve, 1998:236). En cuarto lugar, el acento neoliberal en la descentralización dio más responsabilidad a los gobiernos locales, tanto para ser más eficientes como para reducir las presiones del interior sobre el gobierno central, con inclusión de los servicios urbanos. En esencia, las condiciones que crearon y propiciaron los movimientos de invasores ilegales de tierras –la sustitución de importaciones y el populismo- eran ya historia. Los movimientos de invasores ilegales de tierras no desaparecieron, pero dejaron de ser un rasgo fundamental del repertorio de movimientos sociales de América Latina. Venezuela fue la excepción principal. En ese país, el presidente Hugo Chávez, que llegó al poder en 1998 como el candidato “del pueblo”, en oposición al sistema decadente de partidos políticos basado en la oligarquía, dirigió el auge de las invasiones de tierras urbanas para consolidar su base política.

Al mismo tiempo, los movimientos vecinales de base económica persistieron, a pesar de la informalización de la economía y por su causa. Los vendedores ambulantes independientes tienen una larga historia de luchas colectivas por el derecho a un espacio en las calles. Estas movilizaciones fueron especialmente conflictivas allí donde el ambulante era lucrativo. Su éxito, como el de las invasiones ilegales de tierras, dependió de sus lazos con políticos influyentes y de una astuta manipulación del sistema político (Cross, 1998). En realidad, los vendedores en potencia copiaron las tácticas de los invasores ilegales de tierras para reivindicar el derecho a lugares en las calles, como destaque en mi ensayo sobre México. Sin asistencia social disponible para los desempleados y con las oportunidades de empleo que aumentaban con más lentitud que las necesidades de la fuerza de trabajo, los gobiernos, aun cuando fuera con renuencia, se acomodaron a la presión por los derechos ampliados del sector de trabajo informal. Las autoridades comprendieron que el desempleo extendido podía ser políticamente explosivo.

En México, la forma en que el gobierno respondió a las demandas de los damnificados demostró ser un parteaguas en las relaciones entre el estado y la sociedad. Como ya indicamos en el capítulo 6, el gobierno había insistido en un “pacto” (concertación) antes de que la reconstrucción de las viviendas comenzara. Puesto que la concertación desactivó las presiones “populares”, las autoridades repitieron la estrategia después, al aplicar políticas de estabilización neoliberales hostiles a los trabajadores. La inclusión formal de los trabajadores en los acuerdos de estabilización contribuye a explicar por qué la oposición de los trabajadores a su capacidad adquisitiva cada vez menos fue silenciada.

Pero, desde otro punto de vista, el movimiento de los damnificados fue ventajoso para la sociedad, ya que constituyó un hito. A pesar de la concertación, los mexicanos se consideraron menos como sujetos del estado y beneficiarios

ocasionales de sus favores y más como ciudadanos con derechos. Por ejemplo, después del terremoto, la ciudad de México fue sacudida por una movilización estudiantil de amplia base y de varias clases sociales que no se había visto desde 1968. Cientos de miles de estudiantes realizaron una marcha de protesta contra los esfuerzos del gobierno por imponer cuotas y exámenes de ingreso en la universidad (como parte de un esfuerzo por reducir el sector público). Los estudiantes captaron el poder de la capital y ganaron (Castañeda, 1993:204). La efervescencia política desencadenada por el terremoto también ayudó al candidato de la izquierda en 1988, Cuauhtémoc Cárdenas, a ganar dos tercios del voto presidencial en la ciudad de México, hecho sin precedente. Los movimientos sociales amainaron bajo la presidencia de Salinas (quien le ganó a Cárdenas nacionalmente), debido tanto a la persuasión de los dirigentes del movimiento como a su capacidad para convencer a las masas de que el país estaba experimentando un "milagro económico. Sin embargo, la crisis económica que siguió a la devaluación del peso en 1994 y una consecuente erosión del sistema clientelar del partido en el gobierno desataron una nueva oleada de protestas urbanas. En 1996, por ejemplo, la ciudad de México fue escenario de más de 3,000 manifestaciones de protesta (New York Times, 21 de enero de 1997:10). Entre los manifestantes había enfermeras inconformes con la escasez de medicinas en los hospitales sostenidos por el estado. Para dramatizar su inconformidad se extrajeron sangre de sus brazos con jeringas y la regaron en la entrada principal del hospital. Incluso los empleados del servicio de limpieza hicieron una huelga de hambre, asaltaron el Palacio Legislativo en donde se quitaron la ropa y realizaron una marcha desde la capital del estado de Tabasco hasta la ciudad de México. Estas personas pedían una compensación por servicios adicionales privados que algunos políticos les exigían y la reinstalación en sus empleos, los que habían perdido a causa de las políticas de austeridad. Luego, en 1999 otra huelga estudiantil paralizó la universidad nacional en la ciudad de México.

Entre los movimientos que surgieron en el "nuevo México" está también El Barzón, originado por las reformas neoliberales combinadas con una severa devaluación del peso en 1994. El Barzón, compuesto por deudores de la banca, superó las divisiones de clases así como la división rural-urbana. El movimiento, que empezó en 1993 con unos cuantos miles de agricultores encolerizados por la terminación, por parte del estado, de los apoyos a la producción y al consumo, se difundió a escenarios urbanos y llegó a incluir decenas de miles de desempleados y subempleados, amas de casa de clase media y de clase trabajadora, minoristas, choferes de taxi y empresarios. Lo que unió a los partidarios de El Barzón fue la triplicación de las tasas de interés bancarias, combinada con una caída vertiginosa del nivel de vida después de la devaluación de 1994. La alianza de deudores combinó nuevas estrategias de desafío y nuevas expresiones culturales (posmodernas) con las viejas. Los barzonistas montaron un teatro callejero y desfiles estridentes, algunas veces con efigies de jueces corruptos. Hicieron manifestaciones en lugares públicos, incluso con su maquinaria, sus medios de producción, y organizaron colectivamente defensas contra los prestamistas y la policía que confiscaron sus propiedades cuando se vieron obligados a caer en incumplimiento del pago de sus préstamos. En algunas ocasiones, los barzonistas reclamaron con éxito sus tractores, sus coches y sus tierras y convencieron a los funcionarios bancarios tanto a que reestructuraran sus préstamos pendientes como a extenderles nuevas líneas de crédito. Y también convencieron al gobierno para que iniciara programas para el alivio de la deuda. En agosto de 1996, los deudores casi detuvieron las operaciones en la bolsa de valores mexicana y llevaron un elefante hasta las puertas del Banco de México para dramatizar su causa. La base pluriclasista del movimiento y sus estrategias de resistencia indujeron a los bancos

y a las autoridades a dar una respuesta. Y al responder selectivamente a las preocupaciones de El Barzón, el gobierno desactivó el apoyo al movimiento.

Con un resurgimiento en la sociedad civil también en Brasil, apareció un movimiento de deudores semejante. También allí el movimiento fue una respuesta a las políticas macroeconómicas que fueron causa de que las tasas de interés subieran y de que el valor de la moneda nacional bajara. El movimiento por los derechos de los deudores brasileños, formado en 1997, afirmó contar con 10,000 miembros en dos docenas de ciudades brasileñas en los comienzos de 1999 (Wall Street Journal, 6 de enero de 1999:1). Los deudores tuvieron influencia. Puesto que los casos legales pueden durar años, los acreedores llegarían a un acuerdo de renegociación de la deuda o de su condonación parcial.

Los impuestos, por su parte, llegaron a ser una causa de contienda cada vez mayor en el decenio de 1990. Puesto que los gobiernos privatizaron y redujeron los aranceles, su base de ingresos disminuyó; entonces, para generar los ingresos necesarios decretaron nuevos impuestos. Como los latinoamericanos se han resistido históricamente a los impuestos, los gobiernos se toparon con oposición. En ocasiones, la cólera compartida por algunos impuestos recientemente creados juntó a grupos que en otros rubros veían sus intereses como divergentes. Esto ocurrió en Cuzco, Perú, en 1993, por ejemplo, cuando Fujimori anunció que todas las empresas estarían sujetas a un impuesto del 18%. Las fricciones entre mayoristas, minoristas, choferes de camión y grupos diferentes de vendedores del mercado se dejaron de lado para lanzarse unidos a la calle manifestando su oposición al impuesto (Seligmann, 1998:76).

Los habitantes de las ciudades latinoamericanas, encolerizados y desmoralizados con las condiciones sociales y económicas cada vez peores, se dedicaron en número creciente al robo, los hurtos, el saqueo y los tratos ilícitos y, en casos extremos, a los secuestros. Los índices de delincuencia aumentaron (véase ANCLA, 1996). Las ciudades dejaron de ser seguras; su orden moral y social se derrumbó. La delincuencia generó más delincuencia, mientras que la cultura de la ilegalidad se arraigó más y las probabilidades de castigo disminuyeron. La gente rompió con la ley, individual y colectivamente (mediante pandillas, círculos de delinquentes y tratos corruptos coordinados). El desafío siguió un patrón social, incluso en su forma individual. Los jóvenes desempleados y los pobres cometieron la mayor parte de los crímenes, pero también los manejos ilícitos de empleados de cuello blanco aumentaron y se hicieron más evidentes con la democratización. Los agentes de procuración de justicia en muchos países se fueron convirtiendo, cada vez más, en parte del problema, no en su solución. Se unieron a las filas de los delinquentes.

A su vez, el desmoronamiento de la seguridad disparó movimientos para restablecer el orden público. En Río de Janeiro, por ejemplo, un grupo cívico, Viva Río, realizó una manifestación masiva en 1995 en pro de una limpieza del departamento de policía y de mejores servicios urbanos. Cientos de miles, ricos y pobres, jóvenes y viejos, vestidos de blanco se unieron a la manifestación Reacciona Río. La manifestación combinó elementos de movimiento político, de renacimiento religioso y de carnaval. De manera semejante, en la ciudad de

México, dos años después, decenas de miles de residentes frustrados y atemorizados, de todas las clases sociales, pero especialmente de la clase media, desfilaron con listones blancos y banderas azules airados ante una oleada creciente de crímenes violentos. Al igual que los brasileños, pidieron que se acabara con la corrupción y la violencia de la policía, así como con la delincuencia común.

Lima, aún más que la ciudad de México y Río, se convirtió en una ciudad en estado de sitio antes de que el gobierno peruano frenara a Sendero Luminoso. Allí, el desmoronamiento del orden social obedeció a causas políticas tanto como económicas. Los activistas de Sendero realizaron actos de sabotaje contra bancos, oficinas del gobierno e infraestructura básica, hicieron explotar "coches bomba" y perpetraron asesinatos políticos. Estos activistas buscaron deliberadamente socavar la sociedad civil mediante tales ataques desestabilizadores.

Si los habitantes de las ciudades no hubieran recurrido en forma creciente a la emigración a medida que las oportunidades nacionales disminuían, las urbes latinoamericanas habrían sufrido un trastorno aún mayor. Las tasas de emigración, tanto lícita como ilícita, aumentaron notablemente desde el decenio de 1980 – especialmente de América Central, el Caribe y México, pero también de otros países. Los emigrados optaron por "salir" en vez de "expresar", y puesto que enviaban remesas a los familiares que habían dejado atrás, el alivio económico que proporcionaron sirvió para desactivar la presión social en mayor medida.

El caso de Cuba pone de manifiesto cómo la regulación de la actividad económica por parte del estado hace que la actividad se vuelva "clandestina", no que deje de existir, cuando diverge de lo que la gente en la sociedad desea y cuando las opciones legales son limitadas. También subraya la relación simbiótica e interactiva entre lo que hacen los gobiernos y la gente. En respuesta a la escasez causada por los recortes de la ayuda y el comercio soviéticos (y del bloque soviético), el gobierno de Castro restableció el racionamiento en el decenio de 1990. Concebido con la mejor de las intenciones, para "igualar el sacrificio" y hacer que los alimentos estuvieran al alcance de todos, porque la escasez aumentó el valor "real" de mercado de los bienes, surgió un mercado negro desenfrenado. La actividad del mercado negro fue coordinada y basada mayormente en redes informales, con inclusión de redes que iban desde la ciudad en donde se consumían los alimentos hasta el campo en donde se producían. Ya en 1993 se estimaba que el valor del comercio de mercado negro excedía el valor del comercio oficial al menudeo. Casi todo el mundo participó en tratos ilícitos como comprador o vendedores. Su participación variaba más de acuerdo con el ingreso que con la moral. Y atizando el mercado negro de bienes había un mercado negro desbocado de dólares. El dólar se convirtió en la moneda preferida por los isleños. En su esfuerzo por dar marcha atrás al colapso de la economía oficial, el gobierno legalizó la actividad encubierta. Legalizó los mercados urbanos, legalizó el trabajo por cuenta propia y legalizó el dólar. Y a causa de sus propias necesidades fiscales estableció impuestos a la actividad recientemente legitimada. Pero debido a que los vendedores querían las utilidades para sí mismos, el impuesto llevó a una porción de la actividad de nuevo a la "clandestinidad". Al mismo tiempo, la escasez contribuyó a tasas sin precedente de robos, hurtos, soborno y corrupción. Gracias a todo esto, la gente tuvo acceso a bienes que podía vender a su vez, lícita o ilícitamente, dependiendo de la política estatal del momento. Así, la experiencia cubana pone de manifiesto no sólo la manera en que las estructuras y las políticas

del estado modelan el desafío sino también la manera en que incluso la desobediencia encubierta puede inducir el cambio institucional (Eckstein, 1994).

### Resistencia con base en el género

La crisis del decenio de 1980 impulsó la creación de grupos vecinales de mujeres orientados a los derechos humanos y a la subsistencia. Los grupos de derechos humanos llegaron a incluir mujeres de diversos estratos socioeconómicos y, en ocasiones, de diferentes grupos étnicos. Estos últimos se enfocaron en las mujeres pobres. Cada vez más entre la clase media surgieron grupos feministas que combinaron la conscientización con la acción política y social. Mediante estos grupos, el género se convirtió en un eje de temas de estructura social alrededor de los cuales las mujeres se organizaron colectivamente.

De manera paradójica, los gobiernos militares que se afianzaban en la política de masas crearon las condiciones mismas que llevaron a las mujeres a los foros públicos de maneras novedosas. Navarro y Garretón describieron en sus ensayos la manera en que los regímenes militares represivos en Argentina y Chile politizaron inconscientemente lo personal al mismo tiempo que despolitizaban la política institucional. El movimiento de las mujeres por los derechos humanos en Argentina, en articular, alcanzó fama internacional e inspiró movimientos femeninos rurales y urbanos de diversas clases sociales en toda la región (por ejemplo, en El Salvador y en Chile) (véase Stephen, 1997). Pero estos movimientos fueron para restablecer los derechos de la mujer a la maternidad, no para transformar o trascender el lugar de la mujer en el hogar.

Sin embargo, el movimiento por los derechos humanos con base en el género tuvo algunas consecuencias importantes, entre ellas varias que las participantes no anticiparon ni se propusieron. No sólo los movimientos contribuyeron a desacreditar a los regímenes militares, y al hacerlo ayudaron a promover transiciones democráticas, sino que también influyeron en el discurso y las estrategias políticas así como en las políticas oficiales bajo los nuevos regímenes. Además, abrieron oportunidades para las mujeres y sirvieron para modificar un poco las relaciones de género. Los movimientos de mujeres no indujeron por sí solos los cambios, pero fueron esenciales para rehacer las relaciones y las metas de género en la sociedad y en alguna medida también en el hogar.

El género, impulsado también por nuevos grupos feministas, llegó a ser definido como una problemática con importancia suficiente como para que las nuevas democracias incorporaran los derechos de género en sus constituciones y establecieran organismos oficiales de mujeres. La preocupación oficial sobre la igualdad de los géneros no tenía precedentes en la región. Reflejando este cambio de posición, algunos países establecieron cuotas de género en las listas electorales de los partidos. Como consecuencia de las nuevas cuotas, la porción de mujeres en la cámara de diputados argentina aumentó de 4%, en 1991, a 28% cuatro años después. En Brasil, el número de mujeres legisladoras en 1997, cuando las cuotas empezaron, aumentó casi 40% sobre el de las elecciones anteriores. Mientras



tanto, en México, el PRI y su opositor de izquierda, el PRD, adoptaron cuotas para atraer al voto femenino, aunque los partidos no estaban obligados a hacerlo por ley, y otros países de la región debatieron los sistemas de cuota de género al finalizar el siglo (Jaquette. 1997). Las mujeres habían llegado a ser reconocidas como un grupo electoral políticamente importante e independiente de los hombres.

Al mismo tiempo, la redemocratización dividió y despolitizó a las mujeres. Despolitizó a las mujeres en primer lugar, y sobre todo, al poner fin a las condiciones políticas que las habían inducido a manifestarse en las calles: la tortura estatal, la violación y los homicidios por motivos políticos. En segundo lugar, al disentir sobre la manera en que los regímenes nuevos debían tratar a los militares responsables de crímenes contra la humanidad, las mujeres se dividieron como grupo. En tercer lugar, la redemocratización sirvió para que las diferencias socioeconómicas entre las mujeres fueran manifiestas. Los temas que dividen a los latinoamericanos de manera característica, tales como la clase y, en algunos casos, la raza y la etnia, llegaron a un primer plano una vez que la preocupación común sobre los abusos de los derechos humanos dejó de sobresalir. En algunos países, las mujeres llegaron a combinar un enfoque de género con estas otras identidades.

A medida que otras identidades y preocupaciones llegaron a un primer plano, los movimientos de mujeres fueron de menor escala, menos intensos y menos visibles en las calles. Como reflejo de la división de clases que surgía, se abrieron oportunidades para las mujeres de la clase media en el gobierno, en las ONG y en los organismos internacionales. Estas mujeres ya no vieron al estado como su enemigo ni consideraron tan atractiva la política de masas. Si bien los temas de género dejaron de ser materia de gran interés para muchas de ellas, para algunas siguieron siendo importantes. Estas mujeres recurrieron a nuevos programas, a la vez que adoptaron estrategias menos combativas y más constructivas. Por ejemplo, se centraron en la reforma legal en materia de violencia intrafamiliar, salud y derechos de reproducción. Y en algunos países los homosexuales ejercieron presión por sus propios derechos.

Las mujeres pobres, en cambio, siguieron preocupándose por la subsistencia. Al igual que bajo el gobierno militar, cuando se organizaron tendieron a hacerlo a la defensiva, informalmente y en los barrios en los que vivían –de manera característica con el apoyo de partidos políticos de izquierda, grupos eclesíásticos y otras ONG. Pero sus movilizaciones fueron menos frecuentes y menos participativas, aun cuando su vida se hizo más precaria con la profundización del neoliberalismo. Mediante programas que tenían como objetivo el alivio (mínimo) de la pobreza, los nuevos gobiernos austeros se hicieron cargo de las preocupaciones por la subsistencia en una forma que desactivó los movimientos populares autónomos. Esto ocurrió, por ejemplo, en México, Chile y Perú. A su vez, los “pactos” políticos creados por el gobierno evitaron que los partidos de la izquierda politizaran el tema de la subsistencia. El cambio de las circunstancias contribuyó al carácter esporádico y moderado de los movimientos de mujeres pobres en el decenio de 1990.

La dialéctica entre las condiciones políticas cambiantes y las respuestas de las mujeres a ellas se ejemplifica en Argentina. En ese país, la elección de Raúl

Alfonsín en 1983 pareció una victoria para Las Madres de Plaza de Mayo y otros grupos de derechos humanos. Alfonsín contendió por la presidencia con una plataforma de derechos humanos, prometió enjuiciar a todos los que habían sembrado "terror; dolor y muerte", ordenó el enjuiciamiento de los miembros de las juntas, y creó la Conadep, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, para investigar tales hechos. Sin embargo, la Conadep fue solamente un grupo consultivo; fueron los tribunales castrenses y no los civiles los que manejaron los casos de la "guerra sucia", y ningún militar fue llevado a juicio. Además, el sucesor de Alfonsín, Menem, perdonó a los miembros de las juntas anteriores que habían sido encarcelados. Si bien Las Madres de la Plaza de Mayo contribuyeron a allanar el camino para la redemocratización, al exponer las atrocidades militares ante el mundo, los gobiernos civiles se aseguraron de tener el dominio al definir la forma en que las cuestiones de los derechos humanos serían tratadas bajo su gobierno. Dieron prioridad a su propio interés institucional en el gobierno sobre la rendición de cuentas de los militares por sus crímenes contra la humanidad.

Además, la redemocratización desactivó la influencia de Las Madres de Plaza de Mayo porque las políticas de concesiones de los gobiernos civiles dividieron a los grupos de mujeres. Una facción se hizo más militante, mientras que otra se reconstituyó como una ONG de derechos humanos más dispuesta a perdonar y olvidar.

Sin embargo, la cuestión de las desapariciones se negaba a desvanecerse. Los medios continuaban revelando abusos. Algunos militares y policías confesaron públicamente los delitos cometidos. La iglesia fue presionada para rendir cuentas por su apoyo a las juntas militares. Y Las Abuelas de Plaza de Mayo, un grupo escindido de Las Madres, logró, en 1998, la detención del general Rafael Videla, uno de los jefes de estado de la junta. Las Madres lograron conservar como parte de la memoria nacional los pasados abusos militares, de modo que los culpables siguieron siendo públicamente humillados y la sociedad recordó que tales violaciones de los derechos humanos eran intolerables. De hecho, entre la última mitad de 1998 y los comienzos de 1999, quince años después del fin de la "guerra sucia", otros ocho oficiales militares fueron detenidos. Los nuevos arrestos incluyeron al último presidente militar, Reynaldo Bignone, por robo de infantes. Los escuadrones de la muerte habían manejado una sala de maternidad secreta. Se inducía el parto de mujeres embarazadas o eran obligadas a sufrir operaciones cesáreas para luego ser asesinadas. En esencia, los restos del movimiento de mujeres internacionalmente famoso, junto con la labor de otras ONG de derechos humanos, continuaron influyendo en la conciencia de la nación aun cuando el movimiento se dividió internamente y se desactivó. Al abordar las cuestiones de derechos humanos, estos movimientos hicieron más profundo el proceso de democratización fuera del sistema de partidos políticos.

El movimiento de las mujeres evolucionó de manera algo diferente en Guatemala que en Argentina, debido a que la primera tenía una gran población indígena y campesina y un estado aún más represivos. Allí, el gobierno destruyó aproximadamente 440 pueblos, asesinó entre 100,000 y 150,000 personas y dejó a más de 100,000 niños huérfanos, 150,000 refugiados en campamentos en México y alrededor de un millón de personas desplazadas dentro del país entre 1978 y 1985. Contra este telón de fondo, las mujeres se organizaron sin tener en cuenta las clases ni las etnias para defender sus derechos como madres, esposas e hijas. Pero

también se organizaron para presionar con el fin de obtener derechos específicos de orden político, económico y comunitario, y algunos grupos se vincularon con el movimiento de guerrilla. Durante este período ni al base ni los intereses de los grupos fueron, en general, específicos en cuanto a género. Fueron los grupos eclesiásticos los que proporcionaron la poca asistencia financiera, técnica y de dirección que los grupos tuvieron.

Con el restablecimiento del gobierno civil y un estado más permisivo, los intereses de las mujeres fueron más heterogéneos y los grupos fueron más específicamente de género, tanto en su base social como en su centro de interés (véase Berger, 1998). Una nueva constitución legitimó este cambio. Los artículos constitucionales especificaron que el estado debe esforzarse por mejorar la igualdad de los géneros y las condiciones de las mujeres. Con ayuda de las ONG surgieron algunos grupos que se enfocaron en la asistencia social, los servicios psicológicos y legales para las mujeres y en la violencia intrafamiliar, así como en el trabajo y en las identidades indígenas que cobraron nueva vida con la democratización. La dirección de algunos de los grupos nacientes había tenido contacto con el feminismo durante el exilio. La participación en encuentros regionales y conferencias internacionales también acercó a las mujeres a influencias semejantes (véase Sternbach et al., 1992: 214-227). Después, las negociaciones de paz del decenio de 1990 indujeron a las mujeres y a la sociedad civil, en general, a coordinar sus actividades. En este contexto, se formó un grupo inclusivo: el Sector de Mujeres, constituido por grupos de mujeres de diversas etnias, clases y regiones. Vemos aquí cómo las participaciones colectivas pueden volverse más integradas y a la vez más especializadas. Por frágil que fuera la coalición, las condiciones en el decenio de 1990 fueron conducentes a "centrarse" y no meramente a "descentrarse", como lo subrayan los posmodernistas. También cabe señalar que el movimiento de mujeres guatemaltecas se volvió más participativo y menos dado a las confrontaciones de lo que había sido durante los veinte años anteriores.

La actividad de base de las mujeres en el barrio marginado de Villa El Salvador en Lima, mientras tanto, muestra cómo las políticas de austeridad y no sólo la represión indujeron iniciativas comunitarias de creación colectiva de las mujeres pobres y cómo algunas mujeres en ese proceso ganaron considerable fuerza (véase Burt y Espejo, 1995). Aunque Villa El Salvador fue famosa por su politización, no fue la única barriada de Lima en donde las mujeres se organizaron (Schonwalder, 1998). Sin embargo, las respuestas de las mujeres fueron, en ese contexto, aleatorias, variando con la interacción de las condiciones en los niveles macro y de barriada y el trabajo de base de los grupos eclesiásticos y otras ONG. No surgieron tan sólo de las privaciones materiales.

En Villa El Salvador las mujeres organizaron comités de limpieza por manzana para solucionar la falta de recolección de basura; comités para plantar árboles, con el fin de embellecer la zona; grupos de vigilancia para la prevención local de delitos; animadores preescolares (maestros de nivel preescolar), y comedores de beneficencia para satisfacer las necesidades alimenticias de las familias. En 1983 se creó la Fepomuves (Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador), con ayuda de partidos de izquierda. Esta federación centralizó y coordinó las diversas organizaciones locales de mujeres. Poco después de su formación se encargó de coordinar los comités "Vaso de Leche", vinculados con un programa de

la alcaldía para mejorar la nutrición infantil. El gobierno de la ciudad en aquella época estaba en manos de la izquierda. Mediante los grupos vecinales miles de mujeres ganaron experiencia en administración, liderazgo y participación en foros públicos, y no meramente sobre "asuntos de mujeres", como se definían tradicionalmente. Una cofundadora de Fepomuves, María Elena Moyano, por ejemplo, fue vicealcaldesa de Villa El Salvador después de que se convirtió en un municipio independiente (aunque fue brutalmente asesinada por Sendero Luminoso en 1992).

Los comedores populares fueron respuestas a las crisis de subsistencia vinculadas con la reforma neoliberal. Por esta razón, continuaron bajo las nuevas democracias. La información de Santiago de Chile, así como de Villa El Salvador indica que estas iniciativas colectivas florecieron cuando las mujeres ya tenían redes sociales informales en sus vecindarios desde hacía mucho tiempo, sobre las cuales se apoyaron para tener acceso a recursos externos (Schneider, 1995). Cuando los gobiernos se encargaron de la administración de los comedores de beneficencia, como hicieron en Chile y Perú, estos dispensarios llegaron a funcionar como dadores de limosnas, dirigidos individualmente a las mujeres. Los gobiernos en las nuevas democracias regularon los programas alimentarios para su propio provecho institucional. Quisieron despolitizar la pobreza.

Aún así, surgieron otros movimientos en la región en respuesta a una combinación de condiciones económicas y políticas. Éste fue el caso de Conavigua (Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala), una organización fuerte de 10,000 viudas de la clase media, trabajadora y de comunidades indígenas, cuyos esposos habían muerto en la guerra civil de Guatemala. Esta organización proporcionó asistencia psicológica, política y material (Warrem 1998:180). Mientras que las condiciones políticas que indujeron a las mujeres a unirse terminaron con las negociaciones de paz, y aun cuando el movimiento perdió algo de su dinamismo como resultado de esto, su efecto fue de mucho mayor alcance de lo que muchos de sus miembros imaginaron. Con la democratización, algunas dirigentes, como Rosalina Tuyac, se convirtieron en representantes parlamentarias en el nivel nacional. La apertura política transformó al grupo. Su enfoque se amplió y sus prioridades cambiaron. También en este caso los cambios son ejemplo de la interacción entre la dinámica local y la dinámica nacional.

En resumen, en el decenio de 1990 hubo un patrón en varios países de movimientos por y para mujeres atribuible a experiencias económicas, políticas y sociales compartidas. Al mismo tiempo, los movimientos de mujeres tuvieron una variabilidad nacional y subnacional, con condiciones locales, dirección y preocupaciones subjetivas y objetivas por una parte, y políticas estatales sobre mecanismos estatales institucionales por otra. Aunque más tolerantes de la sociedad civil que sus predecesores militares, los nuevos gobiernos democráticos respondieron selectivamente a las demandas de los grupos de mujeres, favoreciendo sobre todo a las mujeres de clase media. Los programas gubernamentales que beneficiaban a las mujeres pobres fueron muy selectivos y se administraron de modo que desactivaron las movilizaciones autónomas populares. Pero tanto a causa de las políticas de los nuevos regímenes como a pesar de ellas, las mujeres siguieron organizándose de maneras nuevas y viejas y teniendo o no el género como su enfoque principal. La participación de las mujeres en los nuevos

movimientos étnicos, señalada más adelante, ejemplifica cómo se configuraron las participaciones.

### Movimientos de base racial e indígena

De acuerdo con la teoría del desarrollo y la modernización, la etnia se desvaneció a medida que los pueblos del tercer mundo quedaron expuestos a las ideas y la cultura modernas, a medida que tuvieron un conocimiento mejor de las lenguas occidentales (en el caso de América Latina, el español y el portugués) y que fueron educados. Pero esas mismas condiciones también tuvieron que ver con un resurgimiento étnico en el decenio de 1990. Y con la etnia, también los movimientos basados en la identidad racial. Los movimientos ejercieron presión a favor de derechos etnonacionales, incluido el derecho a ser colectiva y selectivamente diferentes.

Los movimientos deben ser comprendidos en el contexto de los cambios en el nivel global respecto de los derechos de las minorías sociales. Un consenso global cada vez mayor acerca de estos derechos contribuyó a legitimar los movimientos basados en el estado-nación. Este aspecto internacional representa un caso en el que los valores universales en evolución favorecieron, paradójicamente, la creación de movimientos basados en la premisa del derecho a ser distintos. Pero también hay que comprender los movimientos en el contexto de los cambios experimentados en los niveles nacional y local: con la democratización; el neoliberalismo; los medios de comunicación mejores, y los nuevos recursos humanos y materiales proporcionados por las ONG.

Las solidaridades étnicas del decenio de 1990 estuvieron basadas, en parte, en la premisa de una articulación de identidades previamente latentes o reprimidas: en identidades que las élites habían obligado a los grupos subalternos a ocultar o a expresar en formas transmutadas toleradas, como el indigenismo. En los años anteriores, el indigenismo había concebido a los grupos indígenas una representación nacional, pero no había institucionalizado sus derechos colectivos. Por consiguiente, los movimientos nuevos demuestran que las élites económicas y políticas, nacional y localmente, oscurecieron, reprimieron y manipularon previamente las identidades subalternas en su propio provecho, pero nunca lograron eliminarlas. Obligaron a que la etnia se volviera clandestina, pero no acabaron con ella.

Aun cuando los pueblos indígenas optaron individualmente, con los años, por entrar en la corriente principal de las sociedades y culturas nacionales como mestizos, los movimientos nuevos se basaron en la premisa del derecho a ser diferentes, sobre todo, mas no exclusivamente, en sus propias comunidades rurales. Pero los movimientos conllevaron también nuevas identidades étnicas, nuevos objetivos y nuevas bases de organización y de comunicación junto con las viejas bases. No fue simplemente un renacimiento de la etnia como se concebía anteriormente. En realidad, los movimientos combinaron rasgos premodernos con otros modernos y posmodernos.

Tanto el neoliberalismo como la democratización contribuyeron, sin querer, al resurgimiento y al surgimiento de movimientos en el decenio de 1990, así como a su politización, tal como contribuyeron a otras movilizaciones sociales descritas antes. Las reformas neoliberales prendieron la mecha de los movimientos indígenas cuando los gobiernos despojaron a las comunidades de sus viejas demandas de tierras, cuando retiraron apoyos sociales y cuando promulgaron leyes nuevas para atraer inversiones que trastornaron a los pueblos indígenas.

Al mismo tiempo, los pueblos indígenas enfrentaron menores riesgos al reclamar por sus derechos bajo las nuevas democracias que bajo los regímenes autoritarios previos. Los nuevos gobiernos mostraron cierta tolerancia hacia los movimientos indígenas no por otra razón que la de su interés oportunista en el voto de las etnias. En realidad, en los países con grandes poblaciones indias, los partidos políticos buscaron presentarse como defensores de los intereses de las comunidades indígenas recién politizadas. Mientras tanto, las ONG suministraron a los grupos étnicos recursos materiales, los capacitaron y los alentaron tanto a organizarse a la defensiva como a reclamar nuevos derechos. Las ONG ayudaron también a estructurar los movimientos locales de maneras que atrajeron la ayuda internacional. En respuesta tanto a los criterios internacionales nuevos hacia los derechos de los pueblos indígenas como a las presiones étnicas nacionales nacientes canalizadas por las ONG, muchas de las democracias nuevas llegaron incluso a establecer un marco legal para los derechos indígenas en sus nuevas constituciones. Esto ocurrió por ejemplo, en Guatemala, Bolivia, Ecuador y Brasil. Y países que habían permanecido nominalmente democráticos en los decenios de 1960-1980, como Colombia y México, reformaron sus constituciones para incluir los derechos indígenas en ellas.

Aunque estos movimientos estuvieron atizados, de manera características, por injusticias económicas recién advertidas o experimentadas, tuvieron agendas políticas y culturales. Pidieron respeto por la autonomía legal indígena y por el derecho de gobernar sus comunidades de acuerdo con sus leyes y su propio sistema de autoridad. También ejercieron presión por un concepto de ciudadanía fundado en la comunidad y en la premisa de sus derechos colectivos como indios, junto con una ciudadanía basada en los derechos individuales. Su visión de ciudadanía difería del concepto occidental de derechos y responsabilidades iguales como individuos. Y, de manera congruente con sus demandas comunitarias, insistieron en el bilingüismo y en otros aspectos culturales fundados en el respeto por su herencia étnica.

Lo más importante es que los movimientos adoptaron una expresión étnica porque las comunidades indígenas, en el decenio de 1990, habían tenido algunos dirigentes con el capital social necesario para funcionar en el mundo indígena y en el mundo nacional. El nuevo estrato educado, que había experimentado una movilidad socioeconómica adicional parcial pero obstaculizada, no rompió con sus raíces. Con la capacidad para desarrollar y difundir ideas y valores en lenguas indígenas y sobre pueblos indígenas, recrearon, rehicieron y restablecieron la prioridad de la cultura indígena. Y lo hicieron de una forma que tendió puentes entre diversas comunidades indígenas (que no hablan la misma lengua india), entre ellos mismos y hacia otros en el sector "popular" nacional.

La combinación de circunstancias ayuda a explicar el surgimiento y los patrones de los movimientos indígenas nacionalmente importantes en México, Bolivia, Ecuador y Guatemala. Junto con Perú, estos países son al patria del 90% de los pueblos indígenas de América Latina (Yashar, 1998:24-25).

El movimiento zapatista (EZLN) en Chiapas, México, internacionalmente fue el más famoso de los nuevos movimientos indígenas, mas no porque fuera el mayor o estuviera enteramente bajo al influencia de una dirección indígena. Más bien porque su dirección y su principal vocero, con el seudónimo de subcomandante Marcos, usó astutamente los medios y el internet y se alió con diversos grupos de derechos humanos y ONG dispuestas a defender la causa zapatista. El movimiento, como ya dijimos, combinó tácticas violentas y no violentas, demandas de cambios locales con demandas de cambios nacionales y usó el simbolismo histórico, incluido en nombre del mismo del movimiento, con la última palabra en tecnología del ciberespacio.

Los zapatistas amalgamaron un sentimiento compartido de privación socioeconómica con la identidad étnica, y combinaron las demandas económicas y políticas con las demandas culturales. Al presionar a favor de su causa ayudaron a crear una apertura política para otros movimientos indígenas también. Los zapatistas pidieron con apremio el respeto por la autonomía cultural y política, la dignidad y la justicia para los grupos indígenas, y también para una democratización mayor nacional y localmente. El movimiento combinó en seguida una preocupación por la justicia étnica con intereses más amplios, sin duda porque la población indígena de México era pequeña, porque su líder máximo no era indio y probablemente también porque las condiciones estaban maduras por la crisis económica nacional que siguió a la devaluación del peso en 1994, para un desafío de base más amplia al gobierno y a la hegemonía del PRI.

Desde el comienzo, los zapatistas se opusieron al neoliberalismo de una manera abstracta, sino concreta. Instaron a rechazar el TLCAN, a proteger las tierras comunales amenazadas por la reforma a las leyes agrarias durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) y al restablecimiento de los subsidios a los precios agrícolas que los gobiernos neoliberales, más mezquinos, habían estado retirando desde el decenio de 1980.

Los zapatistas, reconociendo los límites de una estrategia armada, se dedicaron a construir una coalición: una alianza multiétnica, multclasista y transterritorial. Como parte de su estrategia "centralizada", los zapatistas invitaron a grupos cívicos y a miembros de partidos de oposición de todo el país a debatir las maneras de democratizar el estado, a formar el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN) y a colaborar con el PRD, el partido de izquierda que había ganado influencia regional y nacional después de la profunda recesión económica de 1994-1995. La asamblea fundadora del EZLN culminó con una marcha de 1,111 guerrilleros desarmados y simpatizantes zapatistas desde Chiapas a la ciudad de México. Esta marcha recibió una gran publicidad. Los zapatistas hicieron coincidir su

llegada a la capital con la celebración anual de la independencia de México, Una vez más la fecha demostró el uso magistral del simbolismo histórico por parte de los zapatistas.

Los zapatistas, con el deseo de ser más que un movimiento indígena, lograron desencadenar una oleada de manifestaciones civiles. Por sí solos no indujeron la plétora de movilizaciones que siguió como las que ya han sido descritas en la ciudad de México. Sin embargo, los zapatistas mostraron ser una fuente de inspiración del "sector popular" y contribuyeron a una erosión del gobierno y de la legitimidad del PRI que hizo que el desafío fuera más probable. La actividad popular naciente combinó los personajes de tipo cómico y el teatro callejero improvisado con manifestaciones de protesta al estilo de antes. Un personaje con una máscara parecida al anterior presidente, Salinas de Gortari, responsable por respaldar el ingreso de México al TLCAN, por ejemplo, surgió en las calles congestionadas de la ciudad de México con una ametralladora de juguete con la cual apuntaba a los automóviles. Esta burla a un ex presidente no se había visto en México en los decenios anteriores. Al mismo tiempo, los zapatistas inspiraron a un movimiento de guerrilla pequeño y más tradicional en el estado de Guerrero. Guerrero (igual que Colombia) tiene una historia de desafío guerrillero, sobre la cual se construyó el nuevo movimiento. Sin embargo, en los últimos años del decenio de 1990 las movilizaciones no indígenas inspiradas en el zapatismo fueron más episódicas y menos coordinadas de lo que habían sido los movimientos sociales a mediados del decenio de 1980 (véase Zermeño, 1997). La experiencia mexicana indica que la democratización avivó la movilización colectiva sostenida más entre los indígenas que en otros pueblos. El PRD había buscado coordinar y canalizar los movimientos localizados del sector "popular" en su esfuerzo por establecer su base política.

A su vez, los movimientos indígenas en las tierras altas de Bolivia, al igual que los movimientos laborales previamente descritos, deben comprenderse en el contexto de la revolución del país en 1952. Antes del levantamiento, los indios no tenían derechos políticos reconocidos nacionalmente. Con la revolución obtuvieron derechos electorales y otros, y sus identidades fueron englobadas en el término campesinos. Sin embargo, en el nivel local. La etnia siguió siendo social y culturalmente importante, ya que el estado débil sólo penetró mínimamente en las comunidades remotas (aun cuando lo hizo más que en el período prerrevolucionario). Un movimiento karatista, al cual me referí en mi introducción a este volumen, cobró impulso después de que el país cayó bajo el gobierno castrense en el decenio de 1960. Los karatistas, cuyo nombre derivaba del de un héroe aymará del siglo XVIII, asumieron el control de la confederación campesina dominada por los militares y cuestionaron un pacto militar-campesino iniciado por el gobierno (Rivera Cusicanqui, 1984). Los militares había intentado usar al campesinado de una manera bonapartista para establecer una base de apoyo civil, con el fin de contrarrestar el poder de los sindicatos militantes y de civiles demócratas de clase media. Y, denotando su autonomía, los karatistas también se negaron a subordinarse a la federación sindical nacional. Los sindicatos, parte de la coalición revolucionaria, había intentado manipular de manera semejante a los campesinos para sus propios fines políticos.

Aun cuando el movimiento karatista perdió fuerza den el decenio de 1990, el voto indígena, con la restauración de la democracia, fue considerado tan



significativo que el latifundista prerrevolucionario Gonzalo Sánchez de Losado escogió al karatista Víctor Hugo Cárdenas para ser su compañero de planilla como candidato a la vicepresidencia (1993-1997). A cambio de su apoyo político, el gobierno de Sánchez de Losado atendió a las demandas indígenas de educación bilingüe. Y en el contexto de mayor tolerancia y politización étnicas la Amazonia boliviana se convirtió en un nuevo lugar de organización indígena. Los grupos allí urgieron a la autonomía territorial, la reforma agraria y la participación política (Yashar, 1998:25, 35).

Mientras tanto, en Ecuador, decenas de miles de campesinos indios realizaron el Levantamiento Nacional Indígena en 1990, una huelga cívica indígena que duró una semana. Junto con el levantamiento, los campesinos dejaron de entregar sus productos agrícolas a las ciudades, bloquearon las carreteras principales y cesaron el comercio, marchando en masa a las capitales de las provincias. En algunos lugares, los manifestantes ocuparon las oficinas del gobierno. El apoyo al levantamiento fue especialmente importante en las tierras altas centrales y en la Amazonia, bajo la protección de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE (Zamosc, 1994: Trujillo, 1994). La Conaie se basó en dos federaciones regionales importantes, una en los Andes y la otra en la Amazonia. El levantamiento, en particular, y la CONAIE, en general, sirvieron para canalizar solidaridades étnicas localizadas en un movimiento panétnico por medio del cual una nueva identidad india se estableció socialmente. Sin embargo, las identidades étnicas locales no desaparecieron en este proceso.

La Conaie, basándose en organizaciones regionales anteriores, demandó una redefinición de la ciudadanía que reconociera los derechos indígenas a la diferencia cultural y la autonomía política. La Confederación, creada en el decenio de 1980, demandó una redefinición de Ecuador como un país plurinacional, la autonomía para los grupos amazónicos, la educación bilingüe y la legalización de la medicina india (Zamosc, 1994). Luego, en 1996, entró en la lucha electoral como parte de una coalición mayor; por medio de la coalición presentó, con éxito, candidatos andinos y amazónicos al Congreso. Y al año siguiente la CONAIE se unió a las protestas en todo el país que derrocaron al presidente de Abadala Bucaram.

Al mismo tiempo que el movimiento panindio ganaba fuerza social y política, las organizaciones amazónicas dentro de la CONAIE se volvieron más enérgicas. Los indios amazónicos organizaron marchas, demandaron la autonomía territorial y negociaron los términos de la exploración petrolera en su región. Fueron hostiles a la expansión de la exploración petrolera que tuvo lugar tras la liberalización de los reglamentos para la inversión extranjera.

De igual manera, en Guatemala, las organizaciones mayas recién creadas, dedicadas a fortalecer las identidades indígenas, su revitalización cultural y sus derechos, cobraron fuerza en el decenio de 1990. Dirigido por mayas educados, empleados por ONG que se ocupaban del desarrollo y por burocracias estatales (como maestros, trabajadores del servicio de extensión e investigadores en centros del gobierno) se formó un movimiento panmaya construido sobre una base social pluriclasista, en una combinación de profesionales, empresarios, estudiantes, trabajadores del desarrollo, comerciantes rurales y cultivadores. Aunque los

dirigentes vivían de una manera económicamente modesta, contaban con recursos culturales ricos y diversos que iban desde el bilingüismo (es decir, el conocimiento de las lenguas indígenas así como del español) hasta el uso de internet. Por consiguiente, podían comunicarse enseguida con las comunidades rurales, entre la ciudad y el campo e internacionalmente, con redes de solidaridad global (y con miembros de sus grupos en el extranjero).

Al igual que en los otros países con movimientos indígenas nuevos, en Guatemala el movimiento maya politizó y transformó la manera en que los indios respondían a las quejas viejas y nuevas. El acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil violenta del país demostró ser esencial para la vitalidad del movimiento. La participación de las organizaciones indígenas en las negociaciones de paz sirvió para fortalecer al movimiento maya, al legitimar a los grupos y a los derechos indígenas y crear una apertura política para el movimiento. Pero la reunión de grupos indígenas en un movimiento panmaya puede atribuirse a la brutalidad de la represión militar en los comienzos del decenio de 1980 y a una nueva vulnerabilidad económica después de la aplicación de las reformas neoliberales del decenio de 1980. Cuando el gobierno fue urgido desde el extranjero para que se democratizase, los grupos indígenas se encontraron con el "espacio" político para ejercer presión en pro de intereses compartidos que hasta entonces no habían tenido medios de expresión legales. Mientras tanto, el discurso internacional a favor de los derechos humanos que surgió después de la guerra fría proporcionó un lenguaje de derechos en que el movimiento incipiente pudo basarse, y lo hizo (véanse Warren, 1999; Yashar, 1998).

Culturalmente, los intelectuales mayas escribieron nuevos textos escolares que criticaron el racismo de las historias nacionales oficiales, promovieron la conservación de la lengua maya, diseminaron el discurso sobre los derechos indígenas y promovieron los consejos comunitarios constituidos por gente mayor de acuerdo con las normas de liderazgo mayas. No es sorprendente que criticaran el modelo de desarrollo occidental, el cual dio prioridad a la asimilación en detrimento de la conservación étnica y de los derechos indígenas. Sin embargo, al forjar una identidad maya de amplia base que unía a los pueblos por medio de grupos y comunidades de lengua maya, el movimiento guatemalteco, al igual que el ecuatoriano, buscó crear una identidad nueva, una formación social nueva: una nueva identidad que se basara en las diferencias étnicas locales, pero que las trascendiera. El movimiento no sólo instó al respeto de las tradiciones que las élites nacionales y locales habían negado previamente. Cuando en 1992, en ocasión del quinto centenario de la conquista, la activista guatemalteca indígena Rigoberta Menchú recibió el premio Nobel de la paz, los intereses étnicos ganaron más legitimidad. Los grupos indígenas ganaron una nueva voz internacional así como nacional.

En el frente político, el movimiento panmaya convenció al nuevo gobierno democrático de firmar un acuerdo que reconocía los derechos de los pueblos indígenas. También participó en una coalición electoral, Nukuj Ajpop, que ganó algunos escaños municipales y legislativos y se alió con grupos del "sector popular" en el Frente Democrático Nuevo Guatemala (FDNG, o el frente). Pero, al igual que en Bolivia y en Ecuador, en Guatemala el movimiento maya no promovió un partido político independiente de base indígena.

Solamente un país con una población india considerable no tuvo un movimiento importante en el decenio de 1990: Perú. Sendero Luminoso, las rondas contra esa guerrilla promovidas por el estado y la militarización del campo combinados, politizaron a la población campesina de una manera que sumergió a las identidades étnicas. Sólo en la región amazónica, lejos de las tensiones de y contra Sendero, algunos indios se organizaron como tales para defender las demandas de tierras locales y presionar en pro de un gobierno autónomo. La excepción de Perú indica que cuando tanto un movimiento agrario influyente como las maquinaciones del gobierno polarizan al pueblo en líneas no étnicas, es improbable que la democratización formal suscite movimientos indígenas, incluso cuando las condiciones económicas son propicias.

En la Amazonia brasileña también surgieron movimientos indígenas, pero de un tipo diferente. Estos movimientos, que representaban una porción menor de la población nacional y denotaban una organización étnico-social distinta, se centraron inicialmente en los derechos a sus medios de subsistencia tradicionales. La expansión de las agroindustrias, bajo los gobiernos militares y, luego, bajo los gobiernos democráticos, ocurrió a expensas de la economía de los habitantes locales. Pero luego, los grupos amazónicos se asociaron con movimientos nacionales e internacionales que modificaron su centro de interés. La coyuntura política era propicia: en los últimos años de gobierno militar hubo una explosión de movimientos sociales, que incluyó movimientos ambientales y movimientos laborales de "nueva sindicalización", así como un partido político basado en los trabajadores. Brasil tuvo el principal movimiento ambiental de la región, un movimiento que incluyó un Partido Verde y diversos grupos ecológicos territorialmente dispersos. En este contexto, y con ayuda de algunas ONG, la suerte de los caucheros y de otros pueblos indígenas despertó el interés y el apoyo internacionales. Pero el apoyo llegó con una reorientación del movimiento: como un esfuerzo por salvar los bosques tropicales. El movimiento tuvo sus costos, como ocurrió en el caso del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra. Los grandes agricultores, que pretendían apoderarse de las tierras amazónicas, atacaron violentamente, armando a sus propias milicias, a los pueblos indígenas de la zona. Aproximadamente mil personas fueron asesinadas, entre ellas, el famoso dirigente de los caucheros, Francisco (Chico) Mendes (véase Keck, 1995).

Mientras tanto, en países con poblaciones negras, los movimientos se "racializaron". Muchos de ellos se apoyaron en tradiciones traídas de África y en la cultura negra global contemporánea. En el Caribe, Brasil y Colombia surgieron movimientos de base y empuje raciales.

La naturaleza de las demandas de los movimientos basados en la raza varió con las condiciones locales, con inclusión de las experiencias basadas en la clase, pero también varió con las interpretaciones sociales locales de la raza, al igual que los movimientos indígenas del decenio de 1990. En Brasil, por ejemplo, los movimientos dependientes de los dirigentes que inventaron identidades y discursos raciales "uniformes", simplificados y polarizados. Oficialmente, Brasil es una democracia racial, un "crisol tropical" y una multitud de categorías raciales socialmente definidas dividen característicamente a la gente de color en ese país. Para acabar con las divisiones raciales y politizar los movimientos de base racial,

algunos movimientos usaron espectáculos culturales de estilo "afro", como los bailes y el carnaval (Gomez de la Cunha, 1998).

Sin embargo, los movimientos brasileños centrados en la raza tuvieron dificultades para trascender las divisiones de clases. Los mulatos de clase media y los negros y poblaciones de razas mezcladas de clase más baja tienden a tener preocupaciones e identidades diferentes. Los movimientos de la clase baja en el noreste del país, con la mayor concentración de negros pobres, se centraron en los problemas de la pobreza y en las demandas de servicios públicos y amalgamaron sus energías con los movimientos religiosos afrobrasileños. Aun cuando estaban fundados en la raza, ésta no constituía el rasgo más sobresaliente alrededor del cual se movilizaron.

La democratización dio impulso a algunos movimientos de la región cuya base era racial. Aun cuando Colombia fue uno de los pocos países que nunca cayó formalmente bajo el yugo militar desde el decenio de 1960 hasta el de 1980, una nueva Constitución, que entró en vigor en 1991, extendió los derechos colectivos a las comunidades negras y promovió el objetivo de una nación pluriétnica y multicultural (Grueso y Escobar, 1998): de acuerdo con las nuevas normas internacionales que respetaban el derecho a ser diferente. La nueva visión nacional consagrada en la Constitución sirvió de base para la movilización incipiente de la comunidad negra con demandas culturales, étnicas y territoriales en la región del Pacífico. Los dirigentes enmarcaron el movimiento en relación con la redefinición del gobierno de los derechos del ciudadano, pero también en relación con las cuestiones ambientales. En el contexto de una preocupación internacional mayor por los bosques húmedos tropicales, como vimos en Brasil, los científicos y las ONG alentaron a los negros de la zona a hacer hincapié en la conservación de la diversidad biológica y el control de los recursos naturales. De hecho, fue la marginación económica unida al deterioro ecológico lo que atrajo a los negros de la región hacia el movimiento. Sin embargo, al igual que en Brasil, también aquí el movimiento con base racial tendió a no cruzar la división de clases. La mayor parte de las élites negras en la zona no se identificaron con el movimiento. Deseaban no ser considerados como una minoría étnica.

En resumen, la raza y la etnia se convirtieron en una base de identidad y de movilización colectivas en pro del cambio en el decenio de 1990. Sin embargo, de manera muy característica, los movimientos con base en la raza fueron específicos de clase, debido a la importancia continua de la clase, objetiva y subjetivamente. Y por estas razones los movimientos de base racial no se centraron principal o exclusivamente en las cuestiones de raza.

### Movimientos religiosos

Aunque la teoría de la modernización predijo que el secularismo socavaría la religiosidad, la religión ganó un nuevo significado en el decenio de 1990. En otras regiones del mundo en desarrollo, el fundamentalismo islámico se adueñó de la imaginación popular; en América Latina, el protestantismo evangélico, especialmente el pentecostalismo, también lo hizo. En el decenio de 1990, la

teología de la liberación y las Comunidades Eclesiales de Base, como lo describen Levine y Mainwaring en su ensayo, estaban perdiendo en la "lucha por el espíritu", tanto en número como en su capacidad para invocar a la muchedumbre y hablar en su nombre.

Por lo que se refiere a Brasil, Lehmann (1996) sostiene que la teología de la liberación formulada en el decenio de 1960 sobre la premisa de "una opción preferente por los pobres", seguía siendo importante treinta años después. En realidad, Lehmann sostiene que su influencia fue desproporcionada con el número de criterios del estrato subalterno y reformar el catolicismo "desde dentro". También influyó en las elecciones, en las estructuras y las políticas del gobierno posmilitar, y en la agrupación de ONG para el desarrollo en su reclamo por una mayor participación de masas, por los derechos del ciudadano y por la intervención social para paliar los efectos sociales más notables de las políticas de ajuste estructural. De hecho, la labor de las Comunidades Eclesiales de Base entre los estratos más pobres influyó en la vida electoral incipiente del país. En lugar de apoyar a los caciques locales tradicionales, los pobres, influidos por las comunidades, votaron por el nuevo partido de los trabajadores.

Sin embargo, "la opción preferente por los pobres" no pudo detener las "deserciones" y la erosión de siglos de la hegemonía religiosa católica en la región. La transformación religiosa regional ha sido de tal magnitud que se ha comparado con la reforma del siglo XVI (Stoll y Garrard-Burnett, 1993). Una tercera parte de los 20 países latinoamericanos principales tuvieron un aumento de más del 600% en el protestantismo entre los decenios de 1960 y 1990, con grupos evangélicos fundamentalistas y carismáticos que atrajeron más adeptos. Inicialmente, los misioneros se abrieron paso proporcionando alimentos, atención de la salud y servicios comunitarios, junto con el consuelo religioso (Stoll, 1990) pero luego atrajeron conversos con ofertas materiales mínimas. El evangelismo se convirtió en una especie de movimiento social, con una importancia que fue más allá de la esfera religiosa. El evangelismo inculcó una actitud servil hacia la cultura de las clases populares a la vez que atacó muchos de sus elementos centrales (Lehmann, 1996). El cambio cultural inducido por la religión tuvo un atractivo particular para los pobres.

Mientras que los pentecostales afirman estar desinteresados por la ideología, aparte de su aversión al comunismo y la separación doctrinal entre la religión y la política, el impulso del evangelismo en la región fue prácticamente atribuible al auge de la derecha religiosa y su misión política en Estados Unidos. Los activistas políticos conservadores estadounidenses apoyaron los esfuerzos misioneros en América Latina, especialmente, aunque no sólo, en los países en donde los movimientos revolucionarios habían tenido cierto éxito en el decenio de 1980, como Guatemala y Nicaragua. Los evangélicos tomaron el partido de las fuerzas contrarrevolucionarias. Pero, tanto si tuvieron una actividad directa en la política como si no, fueron políticamente conservadores en toda la región.

Al aplicar su lenguaje casi mágico al éxito financiero y a la codicia, el mensaje de los pentecostales concordó, a su vez, con el neoliberalismo (Lehmann, 1996). El pentecostalismo es apropiado para el orden político-económico más

individualista y menos estatista asociado con la reestructuración económica. Por consiguiente, la religión y el cambio económico se reforzaron mutuamente, así como se reforzaban mutuamente la religión y la política.

Mientras tanto, en los países que antes tenían esclavos. Los cultos sincréticos que se basan en la herencia africana de las masas, seguían ganando popularidad. Esto fue especialmente cierto en el noreste de Brasil y el Caribe. Incluso en Cuba, la religión, que había caído en desgracia después de que Castro tomara el poder, tuvo un renacimiento desde el decenio de 1980. Las religiones sincréticas afrocubanas, el protestantismo evangélico y el catolicismo, en orden descendente, atrajeron nuevos creyentes. En 1994 uno de cada cinco cubanos encuestados (por Gallup) reconocía haber asistido a la iglesia durante el mes precedente (Miami Herald, 18 de diciembre de 1994:39 A). Como un indicador de la importancia incipiente de la religión, en el decenio de 1990 cientos de miles de isleños asistieron a las celebraciones anuales de la iglesia, a menudo con amuletos de la santería (Oppenheimer, 1992:341), y el papa fue acogido con la asistencia masiva de fieles cuando visitó la isla en 1998. El propio Castro aprobó tácitamente la religión al recibir al papa. La religión, por su parte, empezó a redefinir el orden político-moral. Socavó la legitimidad del estado marxista-leninista ateo a la vez que desvió el descontento del régimen. Su impacto en Cuba, como en cualquier otra parte de la región, llegó a extenderse a la esfera secular.

En resumen, las nuevas religiones en la región y el renacimiento de las viejas religiones sincréticas (que históricamente entrañaron una resistencia al catolicismo impuesto por los conquistadores) en el decenio de 1990 socavaron la hegemonía religiosa del catolicismo como nunca antes había sucedido. Y tuvieron el efecto, si no la intención, de desafiar al orden cultural e institucional más vasto.

#### El desafío de base política

Los regímenes políticos represivos desde el decenio de 1960 hasta el de 1980, que tuvieron como misión la destrucción de los movimientos políticos radicales, produjeron, paradójicamente, uno de los movimientos de protesta mayores y de base más amplia de los tiempos modernos en la región. Al cerrar las bases institucionales para canalizar las demandas, los gobiernos militares obligaron a los que se oponían al orden político a desplegar medios extrainstitucionales para dar a conocer sus necesidades o a optar por el incumplimiento solapado y la interiorización de las quejas. Aun cuando la rebelión era peligrosa, al centrarse en los derechos humanos fundamentales, surgieron movimientos que ayudaron a las transiciones a la democracia. Los movimientos interclases por los derechos políticos en Brasil, Chile y Argentina, detallados en el libro, contribuyeron al restablecimiento del gobierno civil. Y su impacto se sintió más allá de las fronteras de los países respectivos, en una forma en que los participantes jamás imaginaron. Todos los países de América Latina. Menos Cuba, volvieron a los gobiernos civiles en el decenio de 1990. Incluso países como Haití, que estuvo mucho tiempo bajo un gobierno autocrático, tuvo un movimiento de masas en pro de la democracia (con éxito limitado).

La reestructuración económica neoliberal dio origen a los movimientos, ya que con frecuencia hicieron que facciones importantes de la élite así como los sectores "populares" se opusieran a los gobiernos militares. Las políticas de austeridad neoliberales aplicadas para poner orden en el fisco resultaron la ruina política de los regímenes militares. La gente, encolerizada por la pérdida de sus derechos políticos, aumentó su ira con la disminución devastadora de su nivel de vida. Al mismo tiempo, las ONG que expusieron las atrocidades en materia de derechos humanos por medio de las redes internacionales, contribuyeron a volver la opinión mundial en contra de las dictaduras. Incluso influyeron en la decisión de Estados Unidos de cesar su apoyo a los regímenes, lo cual fue un giro crítico (Keck y Sillini, 1998).

En Chile, la economía estaba en expansión cuando el general Pinochet perdió una votación decisiva en un plebiscito. Sin embargo, las bases del movimiento prodemocracia fueron establecidas antes, durante una recesión económica, como Garretón señala en su ensayo. Los movimientos de oposición se formaron especialmente allí donde las redes informales ofrecieron una base sólida para la resistencia colectiva. Estas condiciones se dieron, por ejemplo, en los barrios miserables chilenos (poblaciones) que habían sido baluartes del Partido Comunista y en donde los sacerdotes de la parroquia reunieron a la gente en comedores populares, talleres para los desempleados y en otras empresas colectivas. Estas condiciones se dieron también entre los estudiantes universitarios, que tenían redes de solidaridad con una tradición de activismo en las que era posible basarse (Schneider, 1995).

En principio, la restauración de la democracia eliminó las bases para movimientos extrainstitucionales con cimientos políticos. Las transiciones ocurrieron en elecciones relativamente libres y justas. Y los partidos políticos, especialmente los de izquierda, buscaron el apoyo de los "sectores populares" y de los movimientos con los que estuvieron asociados. Los partidos de izquierda ganaron elecciones municipales, mas no nacionales. Esto ocurrió también, por ejemplo, en Brasil, México, Perú, Paraguay, Uruguay, Argentina y la República Dominicana. Pero las movilizaciones de masas se disiparon por otras razones también. En primer lugar, la gente deseaba evitar los riesgos de una nueva oleada de violencia, represión y usurpación del poder por los militares. En consecuencia, subordinó sus quejas particulares al interés, ampliamente compartido, en la estabilidad política. En segundo lugar, los movimientos de democratización mismos, como lo indican algunos ensayos en este libro, estaban constituidos por grupos con intereses distintos; únicamente estaban unidos por un interés compartido en una restauración de los derechos políticos y humanos. En tercer lugar, los nuevos gobiernos civiles, como se ilustra más adelante con referencia a Chile, recurrieron a estrategias de tipo "pacto" para desactivar la presión política de la sociedad civil. En cuarto lugar, la difusión de las fuerzas del mercado sin trabas, con las reformas neoliberales, debilitó a los sindicatos y a otros órganos para canalizar políticamente las quejas del sector popular. En tales circunstancias muchos de los movimientos sociales del decenio de 1980 se retiraron a espacios más limitados y se centraron en intereses particulares o en expresiones culturales, si es que aún seguían activos. Y, en quinto lugar, los movimientos populares perdieron su vitalidad porque los activistas de los movimientos se unieron a los partidos políticos y asumieron cargos políticos en las nuevas democracias. La lógica de organización de los partidos políticos y de los organismos gubernamentales con los que los movimientos y sus dirigentes establecieron lazos estaba fincada en el orden, la burocratización y la institucionalización, no en la movilización.

El Partido de los Trabajadores (PT) en Brasil, Izquierda Unida en Perú y el Frente Amplio en Uruguay son ejemplos de partidos de izquierda que construyeron sus bases políticas sobre los restos de los movimientos populares y laborales del periodo de gobierno militar. Aun cuando los partidarios políticos desviaron sus energías de los movimientos sociales en sus respectivos países, las victorias municipales de la izquierda permitieron, en ocasiones, a los "sectores populares" y a los residuos de los movimientos sociales ganar una nueva voz en el gobierno. Esto sucedió, por ejemplo, en Porto Alegre, Brasil (Baierle, 1998).

En algunos contextos, los partidos políticos y los movimientos sociales nuevos demostraron, sin embargo, que se reforzaban mutuamente. Esto fue cierto con el PRD en algunas regiones del interior de México y con el Frente en Guatemala. No sólo los zapatistas y el PRD se vitalizaron mutuamente en Chiapas a mediados del decenio de 1990, sino que la experiencia de Juchitlán, Oaxaca, ilustra también cómo las estrategias de resistencia electoral y colectiva pueden combinarse eficazmente. Los juchitecos realizaron bloqueos de carreteras y huelgas de hambre (así como hicieron uso de tradiciones y símbolos culturales indígenas apropiados) en oposición al PRI (Rubin, 1997). Fue en Juchitán donde la izquierda, en los primeros años del decenio de 1980, obtuvo poder local por primera vez en México. Y en Guatemala vimos cómo los acuerdos de paz propiciaron tanto una coalición política de la izquierda como otros movimientos indígenas y sociales.

La relación entre democratización y movimientos sociales es, en esencia, históricamente contingente. Cuando los partidos políticos llegan a dominar, los movimientos sociales tienden a perder su vitalidad; sin embargo, si no lo hacen, o antes de que lo hagan, los partidos políticos y los movimientos sociales pueden nutrirse mutuamente.

La democratización misma puede inducir nuevos movimientos sociales, aun cuando establezca ostensiblemente los medios institucionales para la expresión de los intereses. En primer lugar, la democratización puede producir sus descontentos. En México, después de las elecciones de 1988, surgieron movimientos contra los fraudes electorales. Los partidarios de estos movimientos sostenían que el "partido oficial" había robado las elecciones. Las Comunidades de Base, aun con la oposición de la jerarquía, tuvieron un papel importante en el movimiento. Y en Brasil, las revelaciones de la corrupción extendida identificada con el primer presidente elegido en el período posmilitar, Fernando Collor de Melo, produjo un movimiento de masas que pedía la acusación formal del mandatario. El movimiento llevó a la primera destitución de un presidente inculpaado en el mundo. La eficacia de ese movimiento puede atribuirse a su insistencia en los principios morales que tenían amplio apoyo social y en el respaldo que obtuvo, finalmente, de profesionales, empresarios y políticos conservadores así como de los sindicatos, los partidos políticos de izquierda, los estudiantes, las ONG, las organizaciones católicas y los restos de los movimientos sociales anteriores. El movimiento también cobró impulso al recurrir al repertorio carnavalesco popular del país y a su patriotismo. Los partidarios de la acusación formal del presidente aparecieron en manifestaciones masivas en múltiples ciudades con sus rostros como un



movimiento a favor de la democracia y de la ética en la política, se consideró como un esfuerzo por fortalecer, no por debilitar, a la democracia novata.

En segundo lugar, los grupos de oposición en el decenio de 1990 usaron los pilares de la democracia para movilizar en pro del cambio. Esto fue especialmente cierto en Colombia. En ese país, los rebeldes secuestraron a los funcionarios de las elecciones, quemaron las papeletas electorales y amedrentaron a los presuntos electores en las elecciones locales celebradas en octubre de 1997 y en las elecciones parlamentarias el mes de marzo siguiente. La profundización de la democracia formal, que incluyó el cambio del sistema de alcaldes designados a otro de alcaldes elegidos, tuvo el efecto, mas no la intención, de fortalecer la desobediencia política en el nivel local. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el grupo guerrillero mayor y más viejo del país encabezaron los boicoteos a las elecciones. Señalaron la corrupción del gobierno y del partido político y los ataques a los candidatos locales de izquierda como razones para alterar a los electores . Las tensiones llegaron al punto de que las fuerzas militares y paramilitares mataron unos 5,000 miembros y dirigentes de la Unión Patriótica, el partido político lanzado por la FARC. La brutalidad logró destruir el partido en 1999 (New York Times). Pero en vez de fortalecer la democracia, la desintegración del partido tuvo el efecto opuesto. Los leales de la Unión Patriótica conservaron sus vínculos con las FARC, el ala guerrillera del movimiento.

En tercer lugar, la descentralización administrativa, fiscal y política, tanto con el neoliberalismo con la democracia, puede generar condiciones conducentes a una resistencia de nivel local. El menor centralismo del estado puede hacer que los gobiernos locales sean más agresivos. Precisamente por esta razón el presidente de Nicaragua, del partido conservador de coalición restringió los nuevos derechos democráticos ampliados y recién concedidos después de la destrucción masiva causada por el huracán Georges en 1998. El presidente envió a las autoridades federales para asumir el control municipal: temía que los alcaldes sandinistas recién elegidos usaran los fondos de ayuda con el fin de movilizar a los electores para ventaja política de su propio partido.

En cuatro lugar, una rescisión de los derechos políticos en las democracias recién restablecidas puede suscitar protestas colectivas. En Perú, por ejemplo, Fujimori se enfrentó a miles de manifestantes en pro de la democracia en junio de 1977, cuando desmanteló la Corte constitucional. Los que protestaban consideraron que los canales políticos formales eran inadecuados para defender lo que consideraban como derechos jurídicos de los ciudadanos.

Sin embargo, en otras circunstancias, la democratización fue manipulada deliberadamente y con éxito para inducir la despolitización. Chile es un buen ejemplo de esto. Allí, la estructuración de la transición por el general Pinochet fortaleció a la derecha, impidió que los militares rindieran cuentas por sus crímenes contra la humanidad y transformó a los partidos de izquierda en defensores del neoliberalismo y al nuevo orden político en organizaciones manejadas verticalmente. El pacto político creado, la Concertación de Partidos por la Democracia, procuró la homogeneización ideológica y el pragmatismo en el discurso y en la política de los partidos. En estas circunstancias, el sistema de partidos

chileno se apartó más de la sociedad para acercarse más al estado; históricamente, los partidos chilenos habían penetrado profundamente en la sociedad (véase Olavaria, 1998). El efecto de esto fue la desmovilización de las participaciones populares induciendo en las masas la apatía política y el desinterés. Un decenio después de que las masas habían propiciado la vuelta al gobierno civil, el 40% del electorado se abstuvo de votar. Los jóvenes y los pobres urbanos, sobre todo, se abstuvieron de ejercer sus derechos políticos recién restaurados.

En Cuba, el único país no democrático de la región, la gente canalizó ocultamente su descontento político. En el decenio de 1990 aproximadamente una quinta parte del electorado, de acuerdo con fuentes oficiales, desafió las órdenes de votar dadas por el gobierno, estropeando su papeleta, votando en blando o negándose a acatar el llamado de las autoridades a "una muestra de unidad" (votando por toda la lista de candidatos oficiales). A pesar de los riesgos de la oposición abierta, unos dos mil habitantes de La Habana, encolerizados por la crisis de subsistencia así como por la continuidad del gobierno de Castro, se amotinaron en agosto de 1994. Fue la mayor protesta desde la consolidación de aquél en el poder. Cuando el gobierno respondió permitiendo a los cubanos abandonar la isla, que "salieran", mas no que "tuvieran voz", unas 33,000 personas aprovecharon la oportunidad antes de que los gobiernos de Estados Unidos y Cuba firmaran un acuerdo que restringía y regulaba la emigración. Además, los disidentes y otros grupos se organizaron informal e ilegalmente en oposición a las condiciones específicas que les desagradaban impuestas por el estado. Mediante la formación del Concilio Cubano estos grupos trataron de coordinar su oposición. Sin embargo, las autoridades limitaron lo que el grupo coordinador podía hacer. Por consiguiente, los funcionarios estatales mantuvieron oculta la mayor parte de los desafíos al régimen, pero no pudieron reglamentarlos hasta acabar con ellos.

En resumen, aunque pocos latinoamericanos deseaban volver a los regímenes represivos de los decenios de 1960-1980, en vísperas del nuevo milenio la democratización demostró que no era una panacea para los problemas de la región. Las nuevas democracias no permitían que la mayoría numérica usara los canales políticos institucionales para atender sus carencias y sus necesidades. Las injusticias económicas y sociales continuaron, e incluso aumentaron, a pesar de la restauración de los derechos políticos formales. La democratización formal y la democratización de fondo no fueron de la mano.

## CONCLUSIÓN

Este capítulo ha puesto de manifiesto cómo los latinoamericanos advirtieron que los cambios estructurales principales del decenio de 1990, la redemocratización y las reformas del mercado, habían resuelto ciertos problemas pero habían creado otros. Los cambios desactivaron los movimientos viejos, pero provocaron otros nuevos que surgieron en respuesta a las condiciones diferentes, pero también a los conceptos diferentes de los derechos y las posibilidades. Por consiguiente, el número de movimientos nuevos en el repertorio de América Latina se amplió.

Los mecanismos institucionales y el discurso propagado de la élite contuvieron, mas no eliminaron los esfuerzos de la gente por modificar las condiciones que le desagradaban y por presionar con nuevas demandas. Sobre todo, influyeron sobre la forma que adoptaría la resistencia: declarada o encubierta, legal o ilegal, localizada o dispersa territorialmente.

El análisis confirma la manera en que un enfoque estructural-histórico capta cómo y explica por qué los movimientos tuvieron formas diversas y enfoques diferentes. Los movimientos variaron con su base social pero, también, con el contexto social en el que la vida individual y de grupo se enmarcaban. Factores de contexto –tales como las relaciones institucionales locales; las alianzas de clases; las culturas de resistencia; el apoyo de los individuos y los grupos más privilegiados; las opciones para salir, y las respuestas de la élite- contribuyeron a la variación en el patrón de movimientos entre los grupos sociales en los países de la región y entre éstos mismos. Aun cuando los movimientos adoptaron diversas expresiones culturales y su estructura fue variada, sus significados estuvieron característicamente basados en las experiencias de la gente y en las percepciones de esas experiencias. La interacción entre la estructura y el organismo (en el nivel del pueblo y en el nivel de los dirigentes), y la estructura y la cultura contribuyeron a la variabilidad local.

Al mismo tiempo, el método histórico basado institucionalmente contribuyó a explicar las diferentes respuestas localizadas a tendencias globales semejantes, y las características generalizables de las respuestas localizadas. Incluso contribuyó a explicar por qué las respuestas fueron localizadas. Al hacerlo, el método histórico basado institucionalmente elucidó y explicó las respuestas colectivas que los análisis basados en la modernización no podían explicar (tanto los que se centraban en las tendencias democráticas como los que se basaban en las tendencias del mercado o en las tendencias culturales occidentales) así como las características translocales y generalizables que los análisis posmodernos locales y céntricos no teorizan y, con frecuencia, pasan por alto.

Dejando a un lado los esfuerzos teóricos de explicación, es probable que las injusticias que persistan en el siglo XXI, y los conceptos distintos de esas injusticias, continúen propiciando nuevos movimientos sociales y nuevas interpretaciones de movimientos nacidos en las condiciones del pasado. Cabe esperar que los latinoamericanos seguirán llevando a sus límites el arte de lo posible, como lo hicieron en el siglo XX pasado. Ellos son su propia y mejor esperanza de un futuro más humano y más justo.